




SINOPSIS

Informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia 2016-2017



SINOPSIS

Informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia 2016-2017



Licda. Zaira Lis Navas Umaña
Directora Ejecutiva del CONNA

Coordinación y revisión:

Lic. Manuel Santos
Licda. Carolina Manzano

Sistematización de la información:

Licda. Sara Argueta
Lic. Luis Ventoza
Lic. Edwin Serrano
Lic. Alejandro Arce
Licda. Ana Silvia Aráuz

Este documento ha sido producido por el CONNA. Todos los derechos reservados.
Se autoriza la reproducción y difusión del material contenido en este producto para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos del autor, siempre que se especifique la fuente.



Consejo Directivo CONNA JUNIO 2015- JUNIO 2017

Presidente del Consejo Directivo

Ing. Roberto de Jesús Solórzano, Viceministro de Hacienda

Representantes de instituciones del Estado

Propietarios (as)

Lic. Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda

Ing. Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad Pública

Ing. Carlos Mauricio Canjura, Ministro de Educación

Licda. Sandra Guevara, Ministra de Trabajo y Previsión Social

Dra. Violeta Menjívar, Ministra de Salud

Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madríz, Procuradora General de la República

Suplentes

Ing. Luis Roberto Flores Hidalgo, Viceministro de Justicia y Seguridad Pública

Lic. Francisco Castaneda, Viceministro de Educación

Lic. Oscar Armando Morales Rodríguez, Viceministro de Trabajo y Previsión Social

Dr. Julio Robles Ticas, Viceministro de Salud

Licda. Sara del Carmen Guardado Gómez, Procuradora General Adjunta

Representación de COMURES

Licda. Milagro Navas, Presidenta COMURES

Representación de la sociedad civil

Propietarios:

Licda. Alicia del Carmen Ávila de Parada, Fundación Educación y Cooperación, EDUCO.

Licda. María Martha Portillo de Álvarez, Fundación Pro Obras de Promoción Humana Siervas de Dios Madre Dolores Medina

Dr. Adolfo Antonio Vidal Cruz, PLAN Internacional INC.

Licda. Gloria Ventura de Huevo, Iglesia Evangélica Amor y Esperanza

Suplentes

Ing. José Luis Sanabria Bonilla, Fundación de Apoyo Familiar, FUNDAFAM

Licda. Celia Yaneth Medrano, Asociación de Desarrollo de Voces de Madres de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad

Lic. José Francisco Lira Alvarado, Asociación Municipios Microrregión del Bálsamo

Lic. Francisco Javier Carranza Ramírez, Fundación Silencio, FUNDASIL

Directora Ejecutiva y Secretaria de Consejo Directivo

Licda. Zaira Lis Navas Umaña

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	11
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	8
1. CONTEXTO NACIONAL	13
2. PRINCIPALES DESAFÍOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	23
2.1 Atención de las niñas y niños en la primera infancia	24
a) Los derechos a la supervivencia y crecimiento integral en la primera infancia: Vida, salud y nutrición	25
b) Derecho a la educación y cultura	28
2.2 Violencia sexual, embarazo y uniones tempranas en adolescentes	30
a) Violencia sexual	31
b) Embarazo y unión en niñas y adolescentes	33
2.3 Homicidios de niñas, niños y adolescentes	34
2.4 Migración irregular de niñas, niños y adolescentes	37
3. CONCLUSIONES	41
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

PRESENTACIÓN

El CONNA elabora anualmente un breve informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador. Dicho informe se realiza en el marco de la competencia establecida en la LEPINA (Art. 135, número 17), relativa a rendir anualmente informe a la Asamblea Legislativa, junto con su informe de labores. Este año, el informe de junio 2016 a mayo 2017 fue extraído de la Memoria de Labores Institucional para convertirlo en un documento independiente con la intención de facilitar la difusión de su contenido para los integrantes del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, otras instituciones vinculadas con la promoción y protección de derechos, como para el público en general.

Dicho Informe constituye una sinopsis sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y adolescencia contemplados en el libro I de la LEPINA, haciendo énfasis en aquellos en los que se identifican avances y en los que presentan mayores limitaciones para el ejercicio de estos derechos. En este sentido, hace un balance identificando las adecuaciones normativas, programáticas y presupuestarias y los principales desafíos que enfrenta el Estado, la familia y la sociedad para el cumplimiento de los mismos.

Considerando las similitudes con informes anteriores, en esta sinopsis se profundiza en el análisis del contexto económico, social y político, brinda información actualizada de las principales variables que intervienen en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y facilita la identificación de temas prioritarios de atención para los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

INTRODUCCIÓN

La niñez y adolescencia constituye una población prioritaria para el Estado salvadoreño no solo por su considerable proporción en relación a la población del país, sino por las implicaciones que representa garantizar su supervivencia, desarrollo y participación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Importantes instrumentos de gestión pública como el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019, El Plan El Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado, incorporan esta población prioritaria y han establecido objetivos, líneas estratégicas y metas que buscan incrementar el acceso y calidad de los servicios, programas y atenciones que promueven, garantizan y protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes a nivel nacional.

El contexto económico, social y político en nuestro país muestra un escenario complejo para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia, principalmente por el bajo dinamismo de la economía; el déficit fiscal del Sector Público No Financiero y el nivel de endeudamiento; la prevalencia de patrones culturales y sociales con marcadas inequidades y desigualdades entre los géneros, prácticas de crianza y entornos violentos que desfavorecen su desarrollo integral; y la persistencia de tensiones político partidarias que dificultan acuerdos políticos en temas claves de país como las finanzas públicas.

No obstante, en medio de ese escenario se identifica la continuidad de avances en la reducción de la tasa de mortalidad materna, la desnutrición, la transmisión de VIH de madre a hijo/a, la cobertura de educación inicial y el fortalecimiento de los docentes; variables que dan cuenta de garantías en derechos universales como la salud y la educación principalmente para las niñas y niños en su primera infancia. También se observa, la reducción de la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven bajo la línea de pobreza y el incremento de los hogares que cuentan con servicios básicos; las acciones encaminadas en la prevención de la violencia realizadas en el marco del PESS las que comienzan a incidir en la reducción de indicadores claves de seguridad ciudadana.

Por el contrario, existen situaciones que requieren de mayores esfuerzos tales como la reducción de la mortalidad infantil, el bajo peso al nacer, el sobrepeso, el incremento de coberturas en educación parvularia y la tasa de analfabetismo en niñas, niños y adolescentes. Aspectos relacionados con el derecho a la integridad personal requieren de la atención prioritaria del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, sobre todo fortalecer la coordinación y articulación para brindar respuestas más efectivas en la protección a derechos. Dentro de estas situaciones de preocupación se identifican: los embarazos, las uniones y la violencia sexual (principalmente en niñas y mujeres adolescentes), los homicidios y la migración irregular (ambas con mayor incidencia en adolescentes hombres).

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

BCR	Banco Central de Reserva
CBA	Canasta Básica Alimentaria
CIP	Certificados de Inversión Previsional
CONAIPD	Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.
CONED	Consejo Nacional de Educación
CONNA	Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
COSAM	Comando de Sanidad Militar
DIGESTYC	Dirección General de Estadística y Censos
EHPM	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
ENS	Encuesta Nacional de Salud
FGR	Fiscalía General de la República
FODES	Fondo para el Desarrollo Local
IML	Instituto de Medicina Legal
INS	Instituto Nacional de la Salud
IPC	Índice de Precios al Consumidor
ISBM	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
IVA	Impuesto al Valor Agregado
LEPINA	Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
LEIV	Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
MINEC	Ministerio de Economía
MINED	Ministerio de Educación.
MINSAL	Ministerio de Salud
MRREE	Ministerio de Relaciones Exteriores
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OLAV	Oficinas Locales de Atención a Víctimas
PDDH	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PESS	Plan El Salvador Seguro.
PGR	Procuraduría General de la República
PIB	Producto Interno Bruto
PNC	Policía Nacional Civil
PNPNA	Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia
PQD	Plan Quinquenal de Desarrollo
RIIS	Redes Integrales e Integradas de Salud
SETEPLAN	Secretaría Técnica y de Planificación
SNS	Sistema Nacional de Salud
UCSF	Unidades Comunitarias de Salud Familiar
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Adquirida



1. CONTEXTO NACIONAL

1. CONTEXTO NACIONAL

La situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia en el país responde a un contexto socio-económico y político en el que se desarrollan las relaciones entre las personas adultas y las niñas, niños y adolescentes, en las que el Estado es el principal garante en corresponsabilidad con la familia y la sociedad.

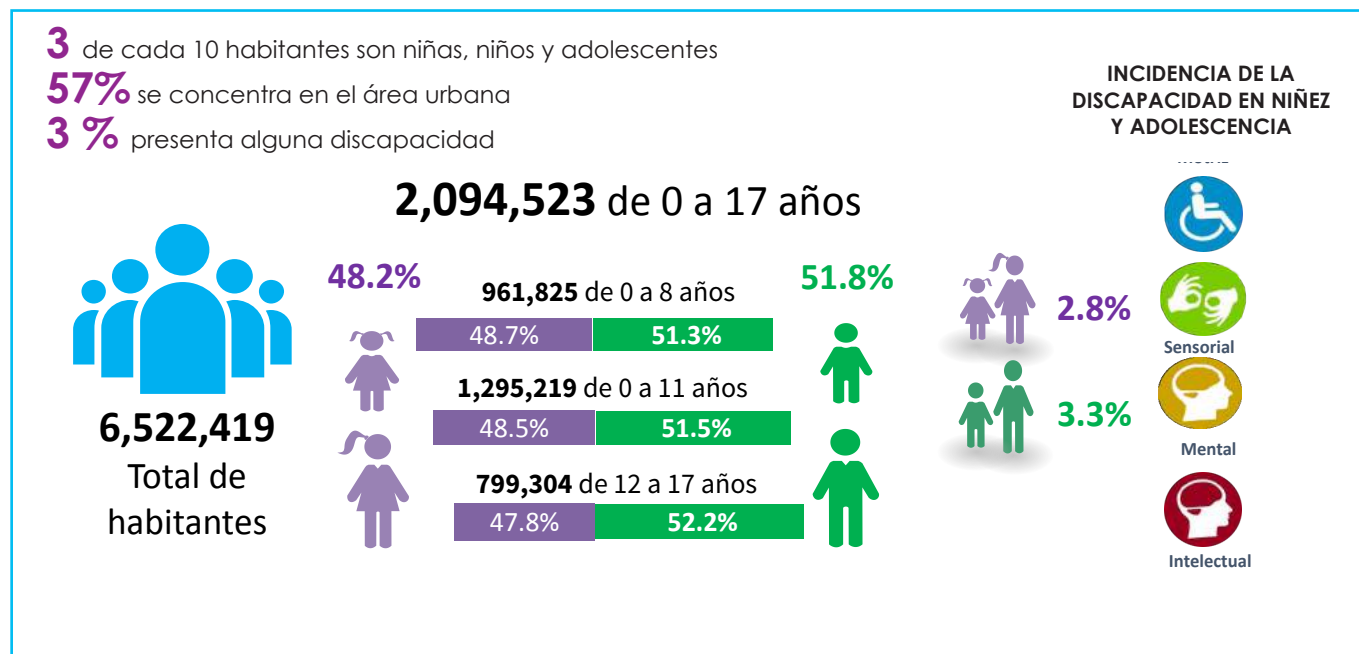
1.1 Principales características demográficas.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2016 reportó que en El Salvador hay 6.5 millones de habitantes, de los cuales la tercera parte tiene menos de 18 años (32.1%). El 61.8% son niñas y niños entre los 0 y los 12 años y el 38.2% adolescentes; asimismo, el 51.8% son niños y adolescentes hombres y el 48.2%

niñas y adolescentes mujeres. El 57% de las niñas, niños y adolescentes residen en el área urbana y el 43% en el área rural. La primera infancia representó el 45.9% del total de población de niñas, niños y adolescentes¹ (DIGESTYC, 2017).

El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), identificó en 2015 que el 3.1% de las niñas, niños y adolescentes presentan alguna discapacidad, incidencia ligeramente mayor en el caso de los niños y adolescentes hombres con un 3.3% en comparación al 2.8% de las niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, dada la mayor concentración de población infantil en el área urbana, también hay un leve predominio de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en esta zona (CONAIPD, 2016, p. 19).

Gráfico 1. Principales características demográficas de las niñas, niños y adolescentes



Fuente: Elaboración propia con base en DIGESTYC (2017) y CONAIPD (2016)

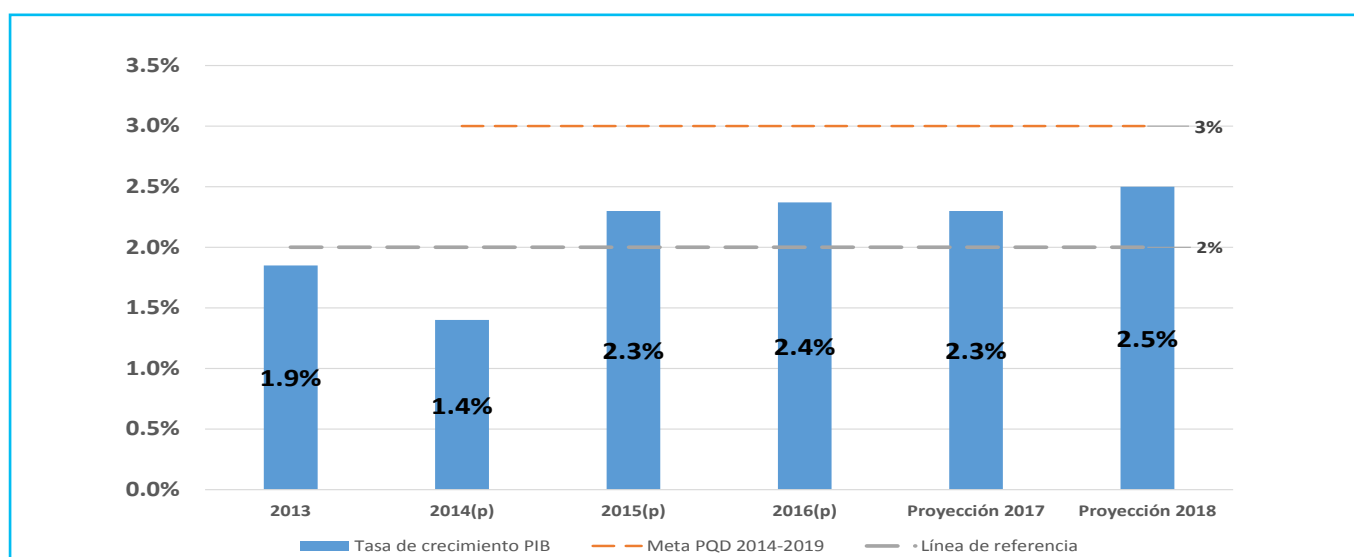
1. Existen diferentes interpretaciones del rango etario que comprende la primera infancia, para efecto de nuestro análisis, comprende desde la concepción hasta los 8 años de edad, según lo consignado en la LEPINA (rango inferior) y la Observación General N° 7 del Comité de los Derechos del Niño.

1.2 Entorno económico

El comportamiento global de la economía de un país es condicionante del comportamiento de otras variables sociales que intervienen en el goce de los derechos, tales como la vida digna, el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, entre otros; así mismo, condiciona la provisión de recursos para el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de su rol de garante de estos y otros derechos.

En la dimensión económica, el país experimentó un dinamismo en 2016 similar al presentado en 2015, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.4%. Este crecimiento es el más alto desde 2008, pero aún se encuentra por debajo de la meta del 3% establecida en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 (SETEPLAN, 2015).

Gráfico 2. Crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes, tasa anual 2014-2016 y proyecciones 2017-2018



Fuente: Elaboración propia con base en datos de BCR, para todos los años.

A nivel internacional, el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), identifica como contribuyentes de este comportamiento al mayor empleo hispano en Estados Unidos, el incremento en el flujo de Inversión Extranjera Directa², la apreciación del dólar, los altibajos en el precio del petróleo, las bajas tasas de intereses y el alto crecimiento económico de los países de Centroamérica, principales socios comerciales (BCR, 2017, p.9).

Internamente se identifica la mayor inversión privada³ y

el fortalecimiento del ingreso disponible de los hogares y su capacidad de consumo debido al aumento del flujo de remesas familiares⁴ (7.2% de crecimiento), mayor crédito destinado a las familias (5.3%), el incremento de los salarios reales⁵ (3.8% de crecimiento) y una inflación promedio baja (0.6%) (BCR, 2017a). También, sobresale la recuperación del sector agropecuario con un crecimiento del 4.6% en comparación al decrecimiento de 1.8% en 2015, abasteciendo una mayor oferta de productos agrícolas generando estabilidad de precios de productos claves dentro de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

2. Un flujo neto de 373.4 millones. US\$1,303 millones entraron (principalmente asociados a inversión en actividad industrial) y 929.6 millones salieron.

3. Los anuncios de inversión de las empresas privadas para 2016 se triplicaron y llegaron a US\$3,136 millones (BCR, 2017)

4. El monto más alto de la historia US\$4,576.0 millones (equivalente al 17.1% del PIB) y el mayor crecimiento de los últimos diez años.

5. Salarios reales calculados a octubre 2016. (BCR, 2017)

El índice de Precios al Consumidor (IPC), como medida de la inflación, también mostró una reducción al cierre de 2016 debido a condiciones climáticas que favorecieron la producción de alimentos, la reducción de los precios del petróleo y por la política pública de subsidios y orientación de precios de mercado (electricidad, teléfono, combustibles) (BCR, 2017b).

La inversión pública también aumentó de US\$ 650.8 millones en 2015 a US\$ 757.7 millones en 2016⁶ (16.4% de crecimiento), representando una ejecución del 66.3% de la inversión programada (3.8 puntos arriba de la ejecución de 2015). El gasto público de consumo por su parte, pasó de US \$3,385.7 millones a US\$3,444.6 millones (1.7% de crecimiento) en el mismo período, manteniendo la tendencia creciente de los años anteriores.

Una mayor actividad económica representó, a su vez, incremento en la recaudación tributaria, principalmente en concepto del IVA⁷ e Impuesto sobre la Renta, pasando de US\$4, 118.1 millones en 2015 a US\$4,237.5 millones en 2016, (15.9% del PIB). No obstante, esta recaudación no alcanzó la proyección de US\$4,442.3 millones establecida en el presupuesto votado 2016.

El gasto público mostró una leve reducción en 2016, pasó de US\$4,777.7 millones a US\$4,667.9 millones en 2016. En su composición mantuvo su enfoque social, aunque el gasto total ejecutado en el área de gestión "Desarrollo Social", disminuyó su proporción como parte del PIB en 2016 (8.2%) en comparación a 2015 (8.6%).

Un mayor nivel de gasto en relación con los ingresos recaudados mantiene a las finanzas públicas en un déficit fiscal del Sector Público no Financiero. Para 2016 este alcanzó el 2.4% del PIB al considerar los recursos requeridos por el Estado para cumplir con el pago de las pensiones. A este factor se le agrega un alto nivel de endeudamiento que ronda el 60.7% del PIB, para ubicar al país en una situación fiscal bastante compleja y restrictiva.

⁶ Formación Bruta de Capital Fijo.

⁷ Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la presentación de servicios.

1.3 Entorno social

En el contexto social, se identifican avances en la reducción de la desigualdad, la provisión de servicios básicos en los hogares, la disminución de los hogares en condición de pobreza y en el abordaje de la violencia e inseguridad; sin embargo, persisten retos importantes en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

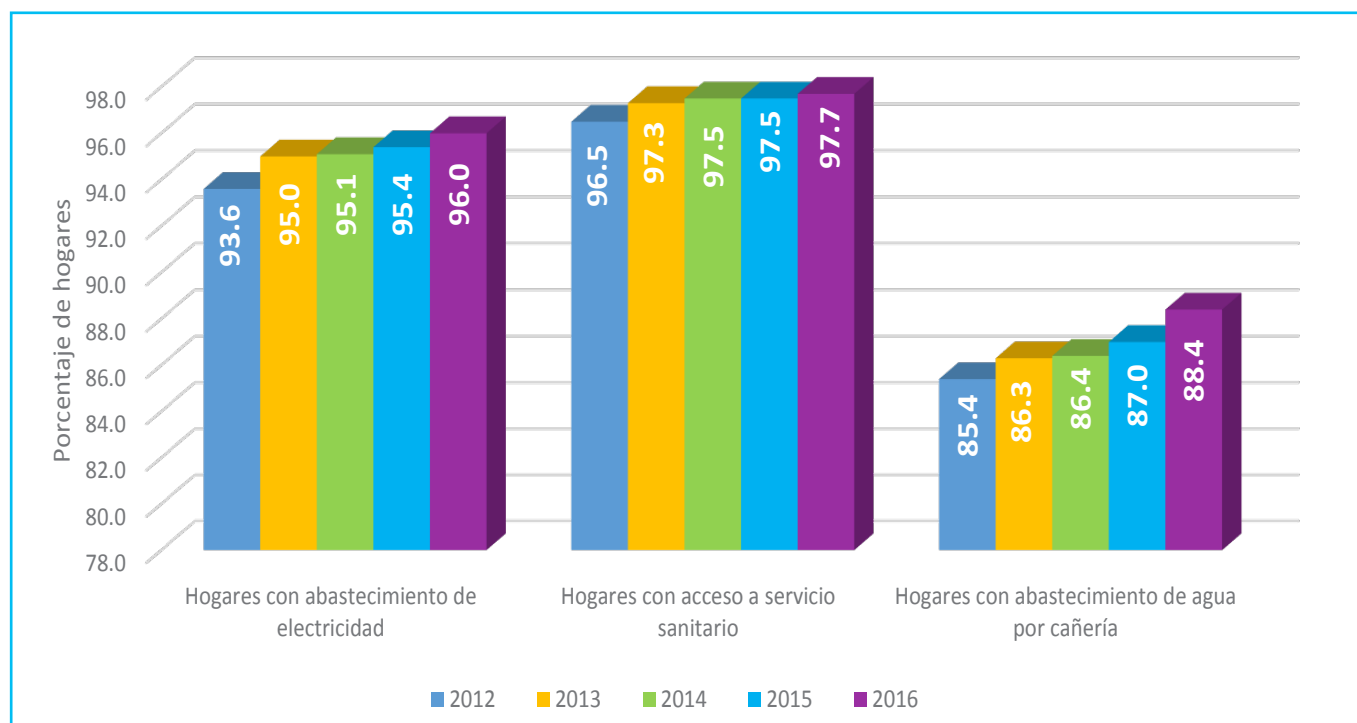
Para 2016, la distribución de la riqueza medida a través del Coeficiente de Gini⁸ fue de 0.37, representando una distribución del ingreso más equitativa entre los diferentes estratos de la población. Este valor representa 0.02 más bajo que la meta establecida en el PQD para 2019.

A su vez, el acceso de la población a servicios básicos se incrementó en comparación a 2015 siguiendo la tendencia de los años anteriores. De los 1.8 millones de hogares para 2016, el 97.7% cuenta con acceso a servicio sanitario, el 96.0% con abastecimiento de energía eléctrica y el 88.4% con abastecimiento de agua por cañería (DIGESTYC, 2017). En relación con este último servicio, la provisión continua del agua⁹ sigue siendo un desafío, ya que se trata de un recurso vital para la garantía de la calidad de vida y salud de las familias.

⁸ El Coeficiente de Gini es una medida de dispersión, usualmente usada para medir la distribución del ingreso. Puede tomar un valor entre cero y uno en el que cero indica igualdad perfecta y 1 desigualdad perfecta, de tal manera que valores cercanos a cero indican una mayor equidad en la distribución del ingreso.

⁹ El porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por cañería incluye aquellas que tienen acceso pero que no reciben el servicio por más de un mes.

Gráfica 3. Porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos, 2012-2016



Fuente: Elaboración propia con base en datos de MINEC-DIGESTYC, EHPM para todos los años

En términos de la pobreza multidimensional el país experimentó una leve disminución en el porcentaje de hogares en pobreza, pasando del 35.2% en 2014 al 34% en 2016¹⁰, esto equivale a 607,138 hogares en los que residen 2, 569,774 personas. En el área urbana el 21.4% de los hogares viven en pobreza multidimensional y 56.1% en el área rural (DIGESTYC, 2017, p.48).

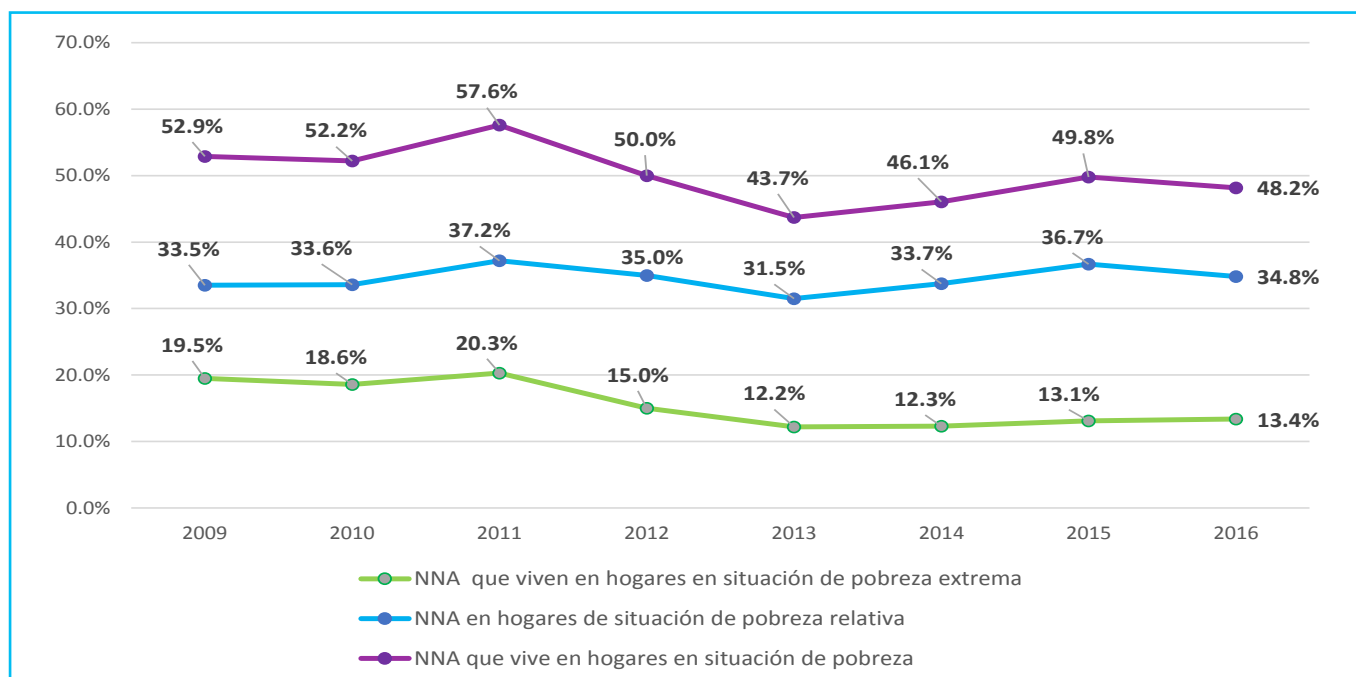
La reducción en el costo de la CBA y el incremento en los ingresos de los hogares, contribuyó a la reducción del porcentaje de hogares en condición

de pobreza monetaria¹¹, pasando de 34.8% en 2015 a 32.7% en 2016. Dicha disminución se dio principalmente en el porcentaje de hogares urbanos y en el nivel de pobreza relativa (DIGESTYC, 2017).

Esta reducción también se evidencia en el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en condición de pobreza monetaria, pasando de 49.8% en 2015 a 48.2% en 2016; lo que representó más de 49,000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares cuyos ingresos superaron la línea de pobreza. Sin embargo, en 2016 se identificó un leve incremento de la proporción de niños, niñas y adolescentes en condición de pobreza extrema, como se representa en la ilustración siguiente.

10. Bajo la metodología de medición de la pobreza multidimensional se considera que un hogar es pobre si uno o más de sus miembros presentan más de 7 privaciones en los indicadores establecidos. Los indicadores responden a la evaluación de las siguientes dimensiones: 1) Educación; 2) Condiciones de vivienda; 3) Trabajo y seguridad social; 4) Salud, servicios básicos y seguridad alimentaria; 5) Calidad del hábitat.

11. La pobreza monetaria se mide a través de una línea de pobreza, la cual es establecida por el Costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Todos los hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la CBA se consideran en pobreza extrema y aquellas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la CBA ampliada (dos veces la CBA), se consideran en pobreza relativa.

Gráfica 4. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, 2009-2016.

Fuente: Elaborado con base en MINEC-DIGESTYC, EHPM para todos los años.

En el ámbito del derecho a la educación en 2016 la escolaridad promedio de la población fue de 6.8 grados y la tasa de analfabetismo de 10.8, manteniendo los mismos valores de 2015. La proporción de niñas, niños y adolescentes en condición de analfabetismo mostró un leve incremento, pasando de 1.6 en 2015 a 1.8 en 2016 (DIGESTYC, 2017). En este campo, la tasa específica de niñas y adolescente mujeres reflejó mayor incremento en comparación a la de la de niños y adolescentes hombres, variando de 1.1 en 2015 a 1.6 en 2016.

La matrícula total para 2016 fue de 1, 518,070 estudiantes, que representa una cobertura neta del 57.3% en educación parvularia, el 75.7% en educación básica y 37.7% en educación media (MINED, 2017). No obstante, se presenta una tendencia decreciente en la cobertura de educación básica a partir del 2010, mostrando desde ese periodo a 2016 una reducción de 17.5 puntos porcentuales

La apuesta estratégica gubernamental y nacional en materia educativa se concreta a partir del **Plan El Salvador Educado**, aprobado en 2016 y formulado por el Consejo Nacional de Educación (CONED), que es un espacio de diálogo con una representación amplia y

plural de la sociedad y el Estado, cuya principal tarea es alcanzar acuerdos nacionales sostenibles en materia educativa, con el fin de promover una transformación hacia una educación integral, universal y de calidad.

El Plan El Salvador Educado define cinco principales desafíos que el Estado salvadoreño debe impulsar para la mejora de la cobertura y calidad educativa del país: 1) La escuela libre de violencia y eje central de la prevención; 2) Docentes de calidad; 3) Atención al desarrollo integral de la primera infancia; 4) Doce grados de escolaridad universal; 5) Educación Superior para un país productivo, innovador y competitivo e infraestructura acorde a la educación integral y de calidad.

En cuanto al derecho a la salud, el Primer Censo Nacional de Peso en Escolares de Primer Grado 2016, muestra avances en la disminución del retardo en talla de niñas y niños en 6.4% en comparación con lo reportado en el III Censo Nacional de Talla del 2007, en el cual la prevalencia fue de 15.5%; también da cuenta del incremento de la obesidad y sobrepeso en 7.74% en relación con un estudio precedente de 2012. Estos resultados condujeron a los ministerios

responsables de educación y salud a articular esfuerzos para regular los productos alimenticios que se ofrecen en las tiendas y cafetines escolares con el fin de garantizar que las niñas y niños cuenten con alimentos nutritivos para su salud y desarrollo.

Adicionalmente, la inversión del Ministerio de Salud (MINSAL) en 2016, permitió el funcionamiento de 818 establecimientos a nivel nacional y de 576 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECSF) básicos y especializados distribuidos en 186 municipios, favoreciendo así una mayor cobertura de los servicios de salud para la población que reside en lugares más lejanos del país. De manera complementaria, se destaca que este MINSAL organizó 5 redes regionales, 17 departamentales y 68 micro-redes en las que también participa la sociedad civil en la identificación y solución de las prioridades territoriales de salud (MINSAL, 2017). A partir de estas acciones, como se verá más adelante, los indicadores de salud comienzan a mostrar cambios favorables para la niñez y la adolescencia.

Por otra parte, el respeto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sigue enfrentando un complejo escenario multicausal que tiene a su base patrones culturales y sociales con marcadas inequidades y desigualdades entre los géneros, prácticas de crianza y entornos violentos que desfavorecen su desarrollo integral, principalmente, el de las niñas y las adolescentes.

Para 2016, la EHPM reporta que el 36.8% (795,700) de las niñas, niños y adolescentes vivían sin uno o ambos padres por motivo de abandono, migración o por muerte de alguno de ellos (DIGESTYC, 2017), generando en esta población el desprendimiento de sus vínculos afectivos más importantes y privándoles del derecho a disfrutar de la vida en familia.

El análisis de las causas identifica que del total de niñas, niños y adolescentes que viven sin uno o ambos padres el 75.8% es por motivo de abandono; el 14.0% por causa de la migración y un 10.1% por la muerte de alguno o de ambos padres (DIGESTYC, 2017). El padre es el principal ausente en cada una de las tres razones que se expresan, de manera que para 2016, el 74.5%



de los niños, niñas y adolescentes que vivían sin uno o ambos padres, carecían de la presencia y cuidado de la figura paterna.

Por otro lado, entre junio 2016 y mayo 2017, los casos de amenazas o vulneraciones a la integridad personal por castigo físico, violencia sexual y violación a la integridad psicológica y moral, representaron el 49.01% del total de casos recibidos por las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, mientras el 20.56% fue por casos referidos al derecho a la salud.

Sin duda, la vulneración de los derechos a la vida y a la seguridad de niñas, niños y adolescentes representa la cara más cruel de la violencia en El Salvador, por cuanto son víctimas de homicidio, son utilizados por maras y pandillas en actividades criminales y crecen en entornos violentos generadores de mayor vulnerabilidad y riesgo. Para 2016, la tasa de homicidios de 0 a 17 años fue del 30.61 ¹², un 12.6% del total de los homicidios a nivel nacional; en su mayoría, ocurridos en espacios públicos.

No obstante, en el último año los principales indicadores de seguridad muestran una variación positiva que podría incidir paulatinamente en mejorar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en el país. Al finalizar 2016, se registró una reducción del 20.7% de los homicidios a nivel nacional con respecto a 2015 y a mayo de 2017 se experimentó una reducción del 48.5% en cuanto al mismo periodo de 2016.

Inciden en estos resultados las acciones emprendidas a partir del Plan El Salvador Seguro (PEES), aprobado en 2015, así como la implementación de los respectivos planes en los 26 municipios priorizados en las fases I y II de dicho plan. En el eje de prevención de la violencia del PEES se destaca la reactivación del Sub Gabinete de Prevención¹³ conformado por 29 instituciones de Gobierno y la organización de 136 Comités Municipales de Prevención de la Violencia; mecanismos que desarrollan acciones orientadas a brindar oportunidades educativas y productivas, así

como a la rehabilitación y dinamización de espacios públicos.

Uno de los principales resultados del eje de atención y protección a víctimas del referido Plan, ha sido la creación de las Oficinas de Denuncia y Atención Ciudadana UNIMUJER-ODAC y las oficinas locales de Atención a Víctimas. Por su parte, el Ministerio de Salud también atiende a víctimas de violencia en el primer nivel de atención en hospitales y a través de las Unidades Integrales para la atención de víctimas de violencia.

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) brindó atención a 5,750 adolescentes y jóvenes a través del Programa "Jóvenes con Todo" en 17 municipios, incluidos los 10 de la fase I del PESS, dichas acciones están orientadas a generar oportunidades educativas y productivas como a la prevención de la violencia.

1.4 Entorno político

La actual situación fiscal generó una mayor tensión entre las principales fuerzas políticas del país, tanto en los procesos de aprobación de nuevos endeudamientos, la discusión de propuestas para la reforma de las pensiones, el retraso en la aprobación del presupuesto 2017 en el seno de la Asamblea Legislativa y en los procesos de inconstitucionalidad y sentencias emitidas por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Como resultado de estas tensiones, en este periodo se presentaron retrasos considerables (hasta de 4 meses) en la entrega de la asignación del FODES a las municipalidades lo que generó, a su vez, atrasos en los compromisos adquiridos por los gobiernos locales: salarios, pagos de proveedores y créditos; estos últimos correspondientes en la mayoría de casos al financiamiento de proyectos de desarrollo.

Adicionalmente, el Presupuesto General de la Nación 2017 se aprobó de manera tardía y el Gobierno tuvo dificultades para conseguir el voto de mayoría calificada para la aprobación de asignaciones presupuestarias para el pago de los compromisos generados por la Ley

12 Cálculo propio con base en los 665 homicidios de NNA reportados por el IML, dividido entre 2, 172,358 niñas, niños y adolescentes que corresponden a la proyección de población de DIGESTYC (revisión julio 2014), para el rango de 0 a 17 años en 2016 y multiplicado por 100,000 hab.

13 Organizado en 6 mesas de trabajo según los ejes del Plan El Salvador Seguro.

de Fidecomisos de obligaciones Previsionales.¹⁴ Esta situación conllevó a una reforma al Presupuesto 2017 a través de la cual se redujo un monto de US\$56.6 millones de diferentes instituciones del Estado para cumplir con el pago de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) y una Reforma al Fondo de Obligaciones Previsionales para ampliar el plazo de pago y aumentar la tasa de interés. Entre las carteras del Estado que se vieron afectadas se encuentran: Salud, Educación, Seguridad, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Pese a lo anterior, las principales fuerzas políticas lograron acuerdos que contribuyeron a la operación del Estado. Los logros más importantes fueron: el "Acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez al Gobierno de El Salvador", firmado en noviembre de 2016; la "Ley de Responsabilidad Fiscal para la sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social" aprobada en el mismo mes, con vigencia a partir de enero de 2017, cuyo objeto es emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país.

La Asamblea Legislativa también aprobó disposiciones transitorias, reformas y nuevas leyes relacionadas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes: 1) La aprobación de la Ley Especial de Adopciones en septiembre de 2016; 2) Las disposiciones transitorias a la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA) relacionadas con el plazo para la autorización y el registro de entidades de atención de la niñez y la adolescencia (D.L. N° 478, 2016) y 3) La reforma a la LEPINA para adicionar al Art. 33 la obligación para los prestadores de servicios al público de acceso a internet de contar con filtros informáticos

¹⁴ Luego de varias semanas de discusiones y de ajustes de la propuesta de presupuesto presentada en 2016, los diputados aprobaron el presupuesto en enero de 2017. Adicionalmente se han presentado una demanda de inconstitucionalidad debido a que el Art. 5 de la Ley de Presupuesto 2017, incluye una contracción de deuda pública requiriendo aprobación de mayoría parlamentaria y debido a que el presupuesto no incluye el total del gasto requerido para financiar el Fondo de Amortización y Fideicomiso del Sistema de Pensiones Público y al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada, así como la devolución de IVA y Renta.





que prevengan o eviten el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenido pornográfico y la prohibición de las acciones que faciliten el acceso, uso o posesión y portación de armas de fuego, municiones y explosivo de cualquier clase por niñas, niños y adolescentes (DL. N°.479, 2016).

En el ámbito de la seguridad, la Asamblea Legislativa prorrogó, en febrero de 2017, las medidas extraordinarias de seguridad hasta abril de 2018 y se encuentran en estudio otros marcos normativos, tales como: la propuesta de Ley de Rehabilitación, Retiro y Readaptación de Miembros de Maras y Pandillas en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, la propuesta para prohibir el matrimonio infantil, la cual está en discusión en la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental en la Comisión de Salud.

De cara a la nueva Agenda Internacional de Desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, El Salvador asumió compromisos relevantes convirtiéndose en uno de los países pioneros en la implementación acelerada de los mismos. A mediados de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN), implementaron la Hoja de Ruta para la construcción de la Agenda Nacional de los ODS, socializando los objetivos y metas establecidas entre las instituciones gubernamentales, identificando las capacidades estadísticas para medir los avances y definiendo las responsabilidades institucionales para la definición y monitoreo de las metas.

Esta nueva agenda prioriza las poblaciones que han estado al margen de los esfuerzos del desarrollo, incluyendo metas específicas relacionadas a los derechos de la niñez y adolescencia; siendo esta una oportunidad para asegurar compromisos nacionales previamente establecidos y contar con asistencia técnica y financiera de la cooperación que contribuya a la construcción de un desarrollo humano, sostenible y basado en derechos.



2. PRINCIPALES DESAFIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

2. PRINCIPALES DESAFÍOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

La LEPINA, estableció un catálogo de derechos, garantías y deberes de las niñas, niños y adolescentes, en coherencia con el derecho internacional de los derechos humanos y, en especial, con la Convención sobre los Derechos del Niño, que advierte que por su estado de madurez física y mental, los niños y las niñas se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad ante los fenómenos sociales, económicos y ambientales, requiriendo de mayor protección y cuidado especial.

Para cumplir con estos desafíos y las metas trazadas en las principales políticas públicas y los ODS, que priorizan acciones dirigidas a la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, es imprescindible contar con una mayor asignación de recursos humanos, financieros, organizacionales y materiales; desarrollando, a su vez, acciones de protección para niños y niñas afectados por las diferentes formas de violencia y discriminación. A continuación, se destacan los principales desafíos del Sistema de Protección Integral:

2.1 Atención de las niñas y niños en la primera infancia

La primera infancia es una etapa de vida crucial que sienta las bases de la salud física y mental, la seguridad emocional, la identidad cultural y personal, así como el desarrollo de las competencias que influyen en todo el ciclo de vida de las personas, periodo esencial para el cumplimiento y garantía de sus derechos, principalmente los relacionados con la nutrición, la protección y la educación (ONU, 2005).

A partir de 2009, el Estado Salvadoreño priorizó la atención integral de la primera infancia en sus principales instrumentos de política pública, entre las que se destacan: la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia (2010); La Política de Protección, Promoción y Apoyo a la

Lactancia Materna (2011); la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) 2013-2023; el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019; La Política Nacional de Salud (2015-2019), el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación (2015) y el Plan El Salvador Educado (2016), entre otros.

Estos marcos programáticos priorizan metas que buscan garantizar los derechos de supervivencia y crecimiento integral de niñas y niños, a través de la prestación de servicios públicos para reducir la mortalidad y morbilidad infantil, promover la adecuada higiene y nutrición y el incremento en la cobertura de vacunación; así como el cumplimiento del derecho al desarrollo, mediante el incremento de la cobertura y calidad de la educación formal y la reducción de los registros de nacimiento tardío.

En coherencia con esa prioridad, el Plan El Salvador Educado incluyó entre sus principales desafíos la implementación de una Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Para tal efecto, la conducción del proceso de formulación de dicho instrumento de gestión pública está a cargo del CONNA y el Comité Técnico Nacional de Primera Infancia, integrado por el MINED, MINSAL, SETEPLAN, la Presidencia de la República, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y organismos de la sociedad civil y de asistencia técnica y cooperación, como la Mesa Técnica Intersectorial para la Educación y el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (METPI), la Red de Educación Inicial y Parvularia de El Salvador (REINSAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

A continuación se detallan los principales avances en el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral y derecho al desarrollo de las niñas y niños de la primera infancia.

a. Los derechos a la supervivencia y crecimiento integral en la primera infancia: Vida, salud y nutrición.

La atención de la primera infancia en el ámbito de la salud se ha enfocado en proveer las condiciones óptimas para el desarrollo de la niña y el niño desde su concepción, contribuyendo a prevenir situaciones que puedan afectar su desarrollo y la salud de la madre durante el periodo de gestación; así como en los primeros cinco años de vida.

En los últimos años, se ha incrementado la cobertura y calidad de los servicios de salud a las embarazadas, lo que ha generado un alto porcentaje de inscripciones prenatales (76.3%) y de partos atendidos por personal calificado (99.9%); dichos servicios incidieron en la reducción de la razón de mortalidad materna de 42.3 en 2015 a 27.4 en 2016 y en la reducción de la transmisión vertical de VIH, que presentó en 2016 solo 1 caso (1.4%). Estos resultados responden a la implementación de la estrategia de Redes Integrales e Integradas de Salud (RIIS), la consolidación del Modelo de atención Integral en salud familiar y comunitaria por el Sistema Nacional de Salud (SNS), el incremento de Hogares de Espera Materna y la implementación de la estrategia Código Rojo en 28 maternidades de la red hospitalaria¹⁵ entre otros.

Asimismo, estos esfuerzos contribuyeron al incremento sostenido de la inscripción infantil en niñas y niños menores de 1 año en el control de Crecimiento y Desarrollo (89%), especialmente, de la inscripción precoz¹⁶ (88.8%) y al incremento de la cobertura de vacunación en niñas y niños menores de un año, la cual alcanzó coberturas útiles¹⁷ por arriba del 90%

15. Dicha estrategia tiene como objetivo dar respuesta en forma rápida y oportuna a las mujeres que presenten complicaciones por hemorragia durante el periodo de post parto.

16. Antes de los 28 días de edad. La cual es crucial para la identificación oportuna de anomalías congénitas que previenen la mortalidad neonatal

17. Cobertura útil es aquella que alcanza un porcentaje de cumplimiento igual o mayor al 90%



en 2016 (MINSAL, 2017); de tal manera que, según reporta el MINSAL, las niñas y niños cuentan con protección ante enfermedades como la tuberculosis, poliomielitis, rotavirus, difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, Influenza tipo B.

El Salvador ha potenciado la práctica de lactancia materna, aprobando la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna en 2013. Se han instalado bancos de leche humana y centros recolectores de leche; al mismo tiempo, se acreditaron 87 establecimientos de salud como Amigos de la Niñez y las Madres.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENS), realizada en 2014, el porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los últimos 2 años que lactaron en cualquier momento a su último hijo o hija fue del 96.1%, y el 42% de mujeres que tuvieron un nacido vivo en los últimos 2 años lactaron dentro de la primera hora al recién nacido; con lo cual se produjo un incremento en el porcentaje de niñas y niños menores de 6 meses que lactaron de forma exclusiva, pasando de 31.40% en 2008 a 47.0% en 2015; también contribuyó a que el 57 % de niñas y niños hayan recibido lactancia continua hasta los 2 años de edad. (MINSAL, INS, DIGESTYC, UNICEF, 2015, p.4)

El Ministerio de Salud aprobó el Plan Estratégico Nacional Intersectorial de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna 2016-2019, en el que se establecen los mecanismos y acciones que buscan favorecer el incremento de las prácticas de lactancia en El Salvador para este trienio.

Sin embargo, los retos de atención en salud de la primera infancia se encuentran principalmente en la reducción de la mortalidad infantil y la reducción de niñas y niños con bajo peso al nacer. En relación con la mortalidad infantil, las Instituciones del Sistema

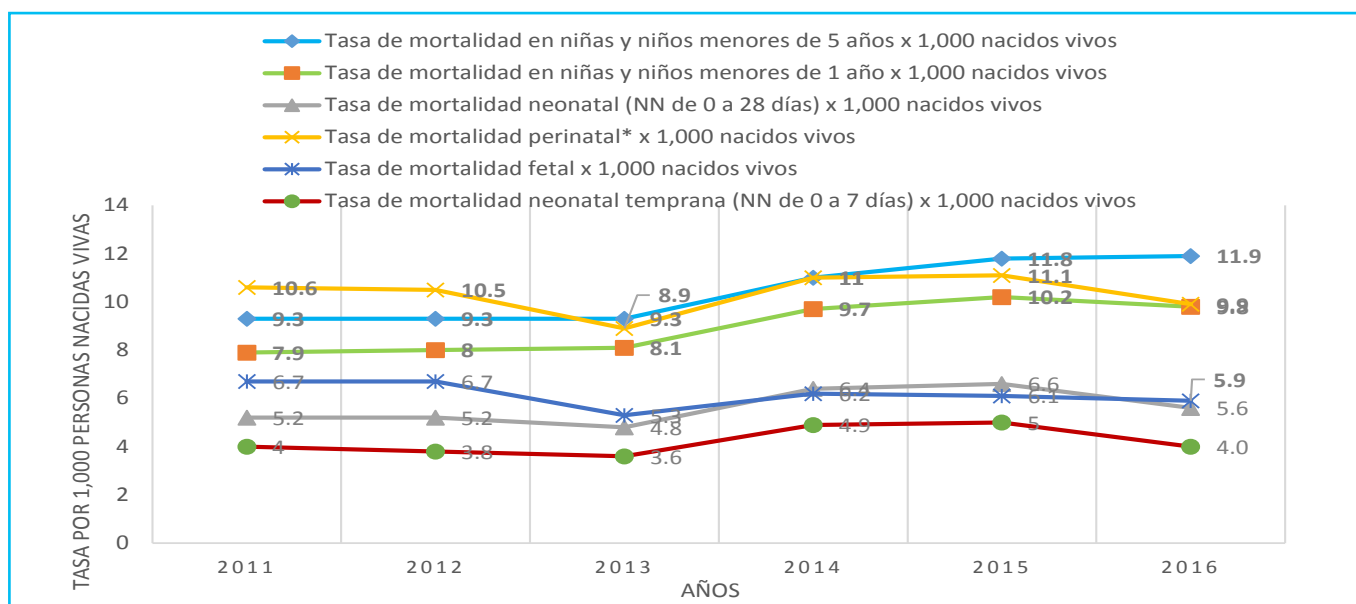
Nacional de Salud (SNS)¹⁸, registraron en 2016 el fallecimiento de 1,341 niñas y niños menores de cinco años. De este total 1,107 (82.5%) fueron menores de 1 año, de los cuales el 57.1% ocurrieron antes de haber cumplido 28 días de nacido (periodo neonatal).

Una de las principales causas de mortalidad neonatal es el nacimiento prematuro (28.3%) y las malformaciones congénitas con un 25%; predominando las malformaciones del sistema nervioso y del sistema cardiovascular (MINSAL, 2016, p.70). Este grupo presenta la mayor cantidad de muertes, debido al alto componente biológico que lo acompaña, así como a las múltiples inequidades que impactan en el hogar y las condiciones de vida de la madre durante el periodo de gestación (MINSAL, 2016).

Expresados en términos de tasa, la mortalidad en niñas y niños ha mostrado una tendencia a la baja a partir del año 2000; sin embargo, para el período 2011-2016¹⁹, el comportamiento de las tasas de mortalidad en menores de cinco años mantuvo una tendencia creciente. En contraste con las tasas fetal y neonatal temprana las cuales muestran disminuciones a partir de 2014.

18. Incluye los datos reportados por el Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Comando de Sanidad Militar (COSAM), Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).

19. En 2014 los comportamientos de las tasas mostraron un incremento con relación a 2013 debido a ajustes metodológicos en la medición de dichos indicadores; situación que respondió al cambio de denominador por las nuevas proyecciones de la población elaboradas por la DIGESTYC. A partir de 2015, todas las tasas vuelven a mostrar una tendencia hacia la baja.

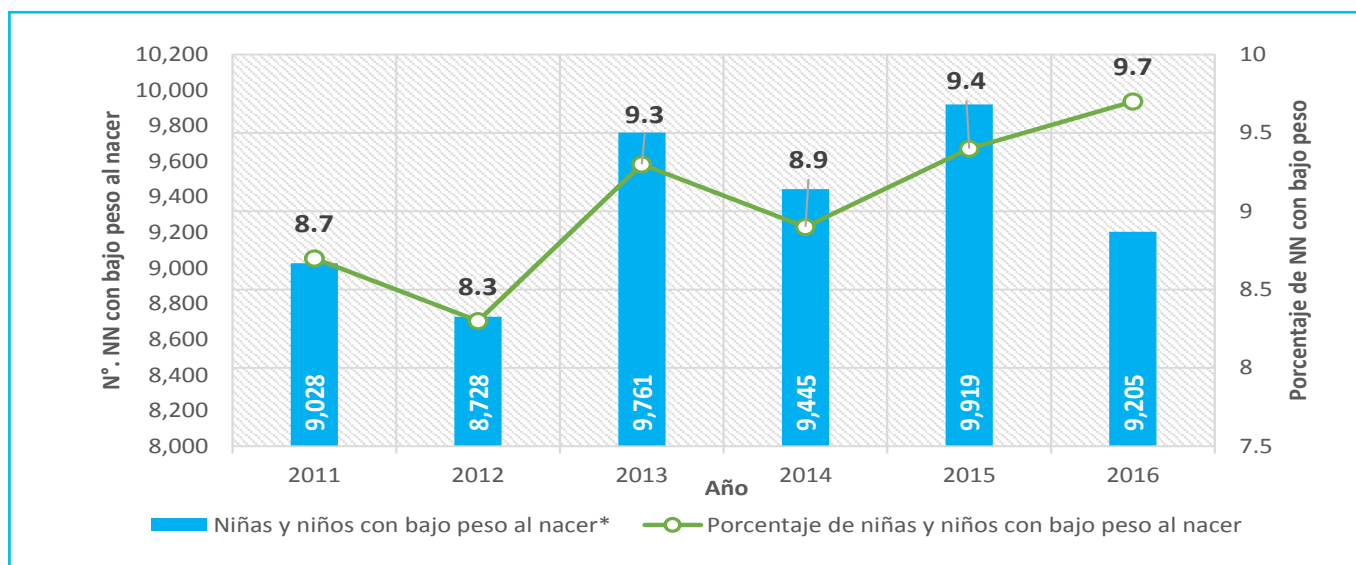
Gráfica 5. Tendencia de las tasas de mortalidad en niñas y niños (2011-2016)

Fuente: Elaborado con base en MINSAL (2015) y (2016)

Para 2016, MINSAL reporta una tasa de mortalidad infantil en menores de un año de 9.8, cifra menor a la de 2015, no obstante, esta se mantiene por encima de la meta establecida en el PQD 2014-2019, en el que se aspira mantener una tasa de mortalidad infantil de 8 por mil nacidos vivos.

Otro factor que merece especial atención es el peso al nacer, condición que se ve comprometida cuando

la niña o el niño nacen con un peso inferior a los 2.5 kg, situación asociada a: un inadecuado estado nutricional de la madre, el nacimiento prematuro, el embarazo en adolescente o en mujeres mayores de 35 años. Este porcentaje mostró un incremento de 8.7% en 2011 a 9.7% en 2016, evidenciando la necesidad de mejoras en materia de seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual reproductiva y prevención del embarazo en adolescentes.

Gráfica 6. Número y porcentaje de niñas, niños con bajo peso al nacer (2011-2016)

Fuente: Elaborado con base en datos de MINSAL 2016



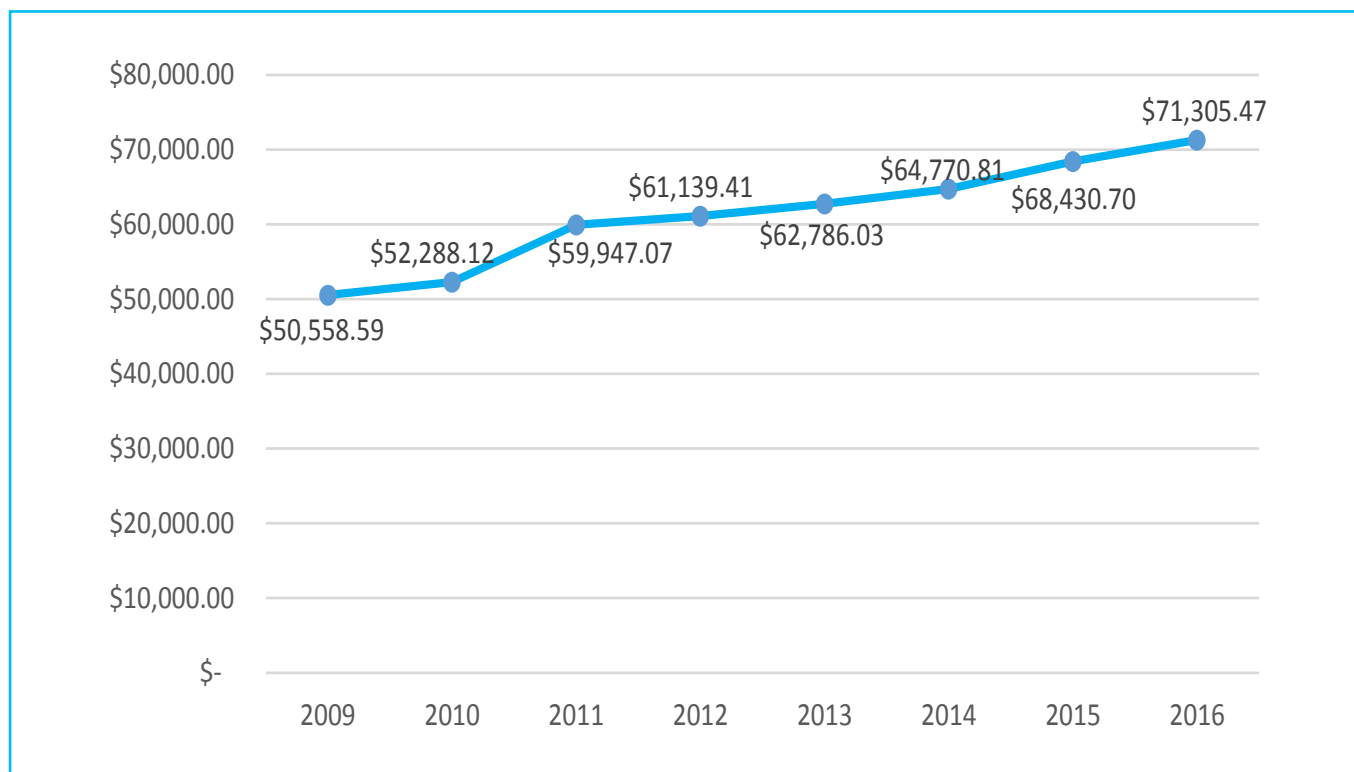
b. Derecho a la educación y cultura.

En el ámbito educativo, el MINED enfocó la atención a la Primera Infancia en el incremento de la cobertura y calidad de los niveles de Educación Inicial (0 a 3 años) y Parvularia (4 a 6 años). En el marco de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, las estrategias del PQD, el PESS y el Plan El Salvador Educado, se ha priorizado la formación de docentes de educación inicial y parvularia²⁰ a través del Plan Nacional de Formación Docente; así como la articulación y coordinación interinstitucional con actores locales; la implementación de proyectos pilotos en los municipios de Mejicanos y Ciudad Delgado para apoyar el PESS a través de la intervención comunitaria; la contratación de asistentes técnicas de primera infancia (ATPI), la dotación de materiales educativos y lúdicos, entre otras (MINED, 2016, p.5).

La Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, definió un nuevo modelo de atención integral para esta población, a través de dos vías: institucional y comunitaria. La primera, se implementa en instalaciones educativas en horario regular por docentes; mientras que la segunda funciona en espacios alternativos en las comunidades mediante atención educativa de la familia en prácticas de crianza.

A partir de 2011, el MINED incorporó una Línea Presupuestaria específica para el desarrollo de acciones vinculadas a la educación inicial y en 2016 estableció una Unidad Presupuestaria de Atención a la Primera Infancia. Tal como se muestra en la gráfica 7, las prioridades establecidas en el PQD en materia de primera infancia se reflejan en una asignación presupuestaria cada vez mayor, pasando de US\$50.5 millones en 2009 a US\$71.3 millones en 2016.

20. Incluye, asistentes técnicos pedagógicos, asistentes pedagógicos de primera infancia, personal directivo y docente (MINED, 2016, p. 5). A mayo de 2016, MINED reportaba la formación de 400 especialistas de Educación Inicial y Parvularia (MINED, 2016, p.14)

Gráfico 7. Presupuesto de MINED en primera infancia, 2009-2016, (En miles de US\$)

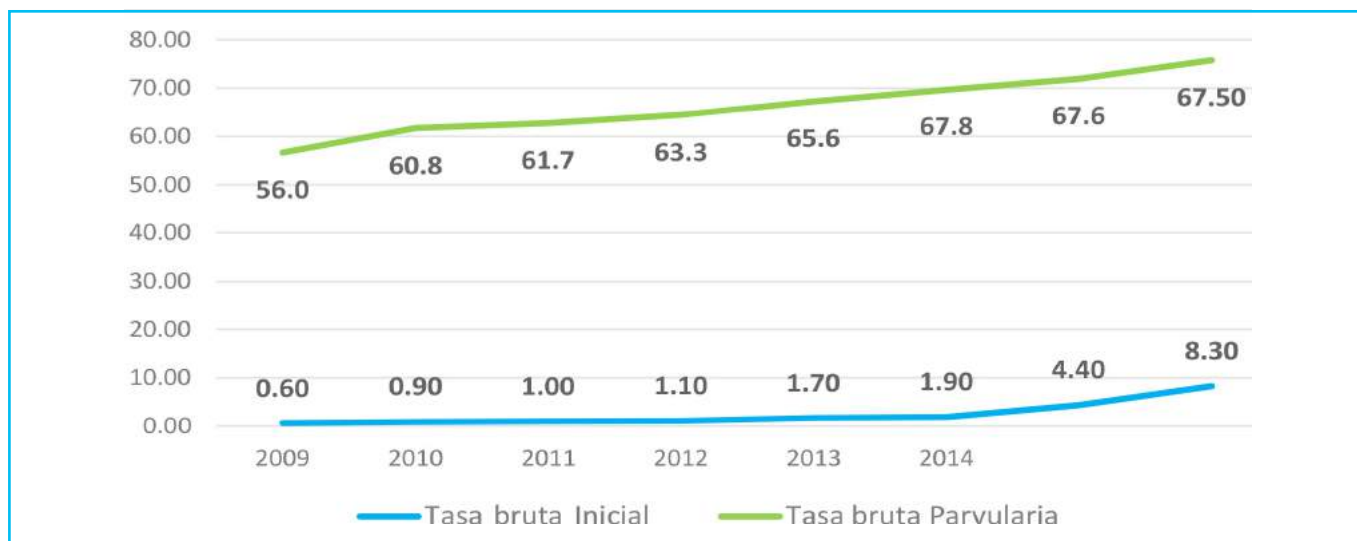
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Ministerio de Hacienda, para todos los años.

En 2016 la oferta educativa pública para la atención de la primera infancia fue cubierta en 4,491 centros escolares que impartieron el nivel de educación inicial y parvularia (MINED, 2016a). De este total de centros, 341 implementaron la vía familiar comunitaria (7.6%) a través de 1,929 círculos familiares organizados, principalmente, en casas de familia (42.7%) y en los mismos centros educativos (27.3%). Asimismo, el MINED contó con 8,651 docentes en dichos niveles, 293 en el inicial (3.4%) y 8,358 en parvularia (MINED, 2016a).

Esta cobertura educativa, contribuyó con el acceso a la educación de 228,835 niñas y niños entre los 0 y 6 años. En el caso de la vía institucional, la matrícula de educación inicial fue de 5,182 y la de parvularia de 187,793. A través de la vía familiar comunitaria se reportaron 16,602 niñas y niños en educación inicial y 19,628 en educación parvularia.

Dentro de esta población, se identificaron 363 niñas y 490 niños con discapacidad, el 81% atendido en la vía institucional y el 19% por la vía comunitaria. La mayor parte de las niñas y niños con baja visión (25%) y discapacidad intelectual (22%). En el sistema de educación especial, se identificaron 458 niñas y niños en los niveles de educación inicial (14.8%), parvularia especial (83.8%) y parvularia para sordos (1.3%).

En términos de la cobertura nacional, que incluye también la atención prestada por entidades privadas, las tasas brutas de educación inicial y parvularia muestran una tendencia progresiva de crecimiento desde 2009 pasando del 0.6% al 8.3% en el nivel inicial para 2016 y de 56% a 67.5% en parvularia para el mismo periodo.

Gráfica 8. Tasa bruta de cobertura en educación inicial y parvularia (2009-2016)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de MINED. Departamento de estadísticas Educativas. Gerencia de Monitoreo y evaluación.

No obstante, el crecimiento de la atención en primera infancia, la proporción de la población atendida continúa siendo baja en relación con la cobertura de otros niveles educativos. La EHPM 2016 identifica que para el rango de edades entre 4 y 6 años el 34.4% no asiste a un centro escolar, por que la persona responsable del cuidado considera que aún no tiene la edad adecuada para asistir (44.5%) o simplemente porque el responsable no quiere (43.2%).

2.2 Violencia sexual, embarazo y uniones tempranas en adolescentes.

El Estado Salvadoreño cuenta con avances significativos en la definición de un marco normativo y programático orientado a la prevención, atención y protección de las víctimas de violencia sexual. A nivel nacional, la LEPINA reconoce el derecho a la integridad personal (Art. 37) y la protección frente al abuso y la explotación sexual (Art. 55). De igual manera, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) define y reconoce a la violencia sexual como "Toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en esta no solo el acto sexual,

sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima" (Art.9 de LEIV). Al mismo tiempo, el Código Penal establece sanciones para los delitos contra la libertad sexual, tales como violación, estupro, otras agresiones sexuales u otros ataques a la libertad sexual; y contempla agravantes a la pena, cuando el delito es cometido en una niña, niño o adolescente.

Por su parte, la Ley Especial Contra la Trata de Persona, en el Art. 5 Literal "b", define como explotación sexual, todas las acciones tendientes a inducir u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual o erótico, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o un tercero.

A nivel programático el PESS, el Plan El Salvador Educado, la Política Nacional de Protección Integral de La Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional de Acción, abordan la problemática de la violencia sexual como una de las principales violaciones a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes y por ende, demandan de la instalación de mecanismos de atención y protección a las víctimas en forma prioritaria.

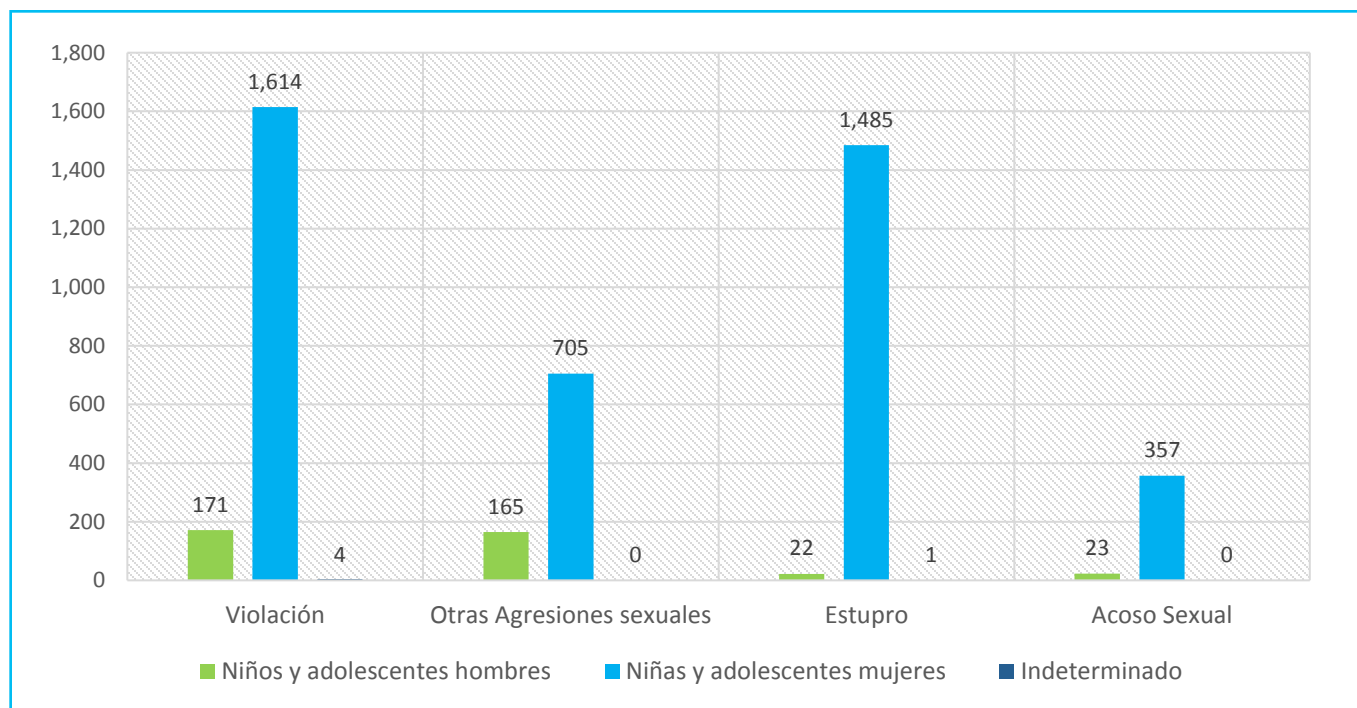
a. Violencia sexual

Una de las principales manifestaciones de la violencia es el abuso sexual. Esta forma de violencia afecta la integridad personal (física, sexual, psicológica y moral) de la niñez y adolescencia, principalmente, de las niñas y adolescentes mujeres, las cuales son doblemente expuestas a ser víctimas; dado el contexto social en el que se desarrollan, en el cual predomina el adultocentrismo²¹ y el patriarcado²².

Datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR), reflejan que las violaciones, el estupro, el acoso sexual y otras agresiones sexuales son los delitos con mayores niveles de denuncia cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Entre enero 2016 y marzo de 2017, la FGR reportó 5,112 niñas, niños y adolescentes vulneradas en su integridad sexual, psicológica y moral por dichos delitos. La gráfica 9 muestra que las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas (81.3% del total de víctimas), siendo

**Gráfica 9. NNA víctimas de delitos contra la libertad sexual denunciadas en la FGR
(Enero 2016 - marzo 2017)**



Fuente: Elaboración propia con base en FGR (2016) y (2017).

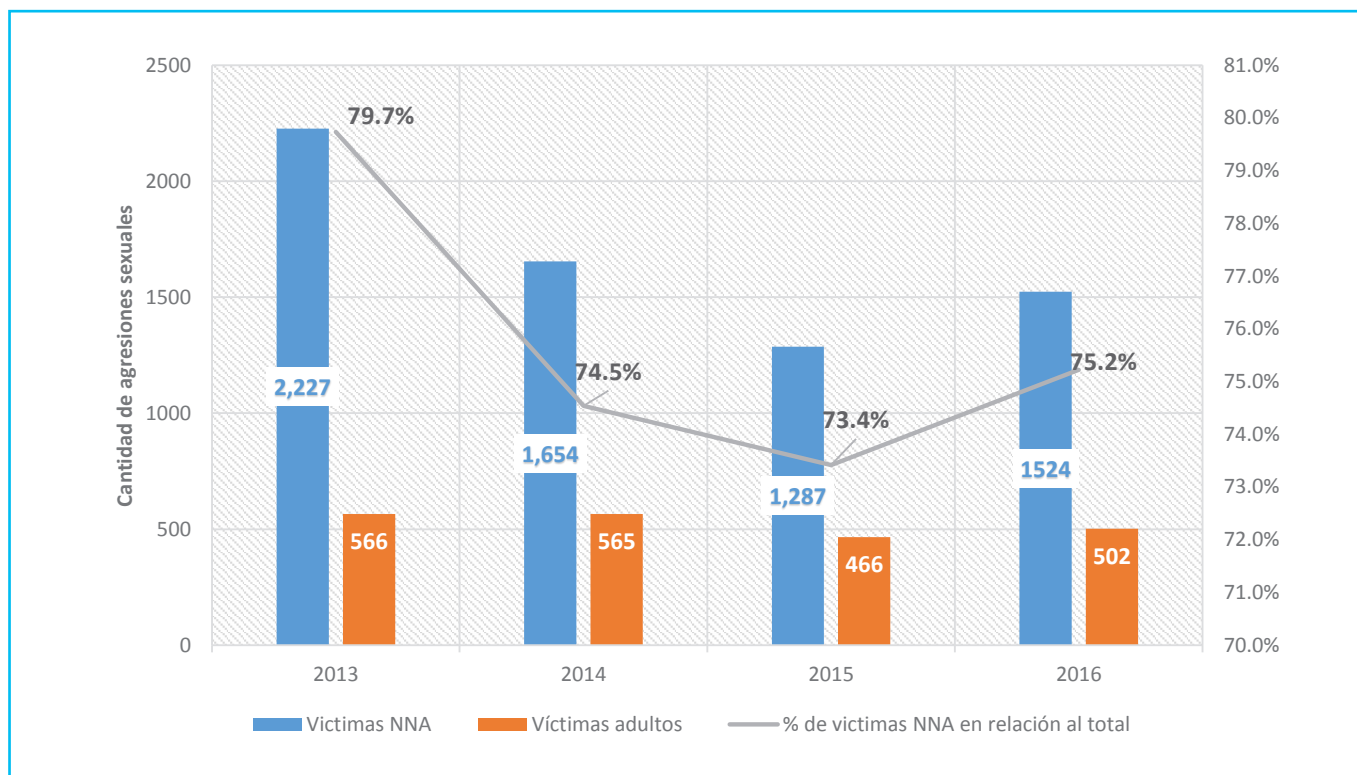
21 Relaciones de poder desiguales entre las niñas, niños y adolescentes con los adultos, en los que destaca la superioridad de los adultos y el acceso a ciertos privilegios de estos últimos, exclusivamente por el hecho de ser adultos. El adulto es el modelo ideal de persona y las niñas, niños y adolescentes son modelos inacabados que no pueden integrarse plenamente a la sociedad y por tanto ser respetados por esta. (UNICEF, 2013)

22 Orden social que se caracteriza por relaciones de dominación y opresión establecidas por los hombres sobre todas las mujeres y criaturas. Se somete o excluye a las mujeres por razón de género y a los más jóvenes por la edad.

las violaciones (35%) y el estupro (29.4%) los delitos con mayor incidencia en esta población.

Al mismo tiempo, la información del Instituto de Medicina Legal (IML) evidencia la alta proporción que representan los peritajes realizados en niñas, niños y adolescentes en los últimos cuatro años, la cual se ha mantenido por arriba del 70%. En 2016, siete de cada diez peritajes médicos realizados por el IML fueron en la población menor de 18 años.

Gráfica 10. Reconocimientos médicos realizados por delitos contra la libertad sexual de NNA y en personas adultas (2014-2016)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de IML para todos los años

Al igual que en la información de las denuncias recibidas en la FGR, los principales reconocimientos del IML en 2016 fueron por casos de violación (57.1%) y efectuados en niñas y adolescentes mujeres (66.8%). Lo anterior, refleja que este tipo de delitos está mediado por un patrón cultural en razón del género y la edad de la víctima, ya que las violaciones (85.8%) predominan en el caso de las adolescentes mujeres, mientras que las niñas son víctimas del delito tipificado como otras agresiones sexuales (86.7%). Característica propia en este tipo de delitos es que el agresor establece relaciones cercanas con las víctimas, en su mayoría, son cometidos por personas próximas a éstas o por miembros del núcleo familiar y ocurren en lugares conocidos o de su entorno inmediato.

En los peritajes realizados en 2016, se identifica que los principales agresores son personas “conocidas”

(28.28%) y “novios” (18.31%)²³. No obstante, este patrón invisibiliza a los agresores que conviven en el ámbito familiar de la víctima, tal es el caso que las agresiones cometidas por padrastro, padres, primos, abuelos, sobrinos y tíos, que representan el 30% de las agresiones; en este subgrupo “el padrastro” es el principal agresor (9.25%), siendo los lugares de mayor ocurrencia en “Casa conocida” (34.5%) y en “casa propia” (31.4%).

De igual manera, en 2016 el observatorio del MINED sobre los Centros Educativos Públicos de El Salvador, identificó que en el 5.18% de los centros escolares²⁴ los directores tuvieron conocimiento de que alguno de sus estudiantes sufrió algún tipo de violencia sexual dentro o fuera de su centro escolar. Se identificaron 141 casos de estudiantes en los que la agresión fue

23. Principalmente en los casos de violación y estupro en adolescentes mujeres.

24. Basado en un total de 5,132 centros escolares públicos.

realizada por un miembro de su familia (53.0%), 49 por otros agresores (18.42%) y 76 sin especificar (28.6%). La edad promedio de los agresores es de 33 años y la más frecuente 40 años (MINED, 2017).

En relación con la protección frente al abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, entre enero de 2016 y mayo de 2017, las Juntas de Protección reportaron 4,180 casos relacionados a la integridad sexual. Dichos casos corresponden a 4,304 niñas, niños y adolescentes como presuntas víctimas, siendo el 92%, niñas y adolescentes mujeres.

Los elevados índices de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes, demandan acciones prioritarias del Estado, particularmente, en cuanto a la adopción de acciones de prevención de la violencia sexual en los espacios más cercanos, como son: el hogar, la escuela y la comunidad; de tal manera que se conviertan en entornos protectores y no generadores de amenazas y vulneraciones a sus derechos. Al mismo tiempo, debe mejorarse el acceso a la justicia y la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de tan graves crímenes.

En cuanto a la atención y protección, en 2017 el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, definió rutas de derivación de casos entre el Hospital Nacional de la Mujer y las Juntas de Protección en casos de amenazas o vulneraciones al derecho a la integridad sexual de niñas y adolescentes; de igual manera, se establecieron protocolos de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas de El Salvador; asimismo, el MINSAL formuló lineamientos técnicos de atención integral de todas las formas de violencia. Por su parte, el Comité Técnico Coordinador del SNPNA, elaboró lineamientos para el funcionamiento coordinado frente a la violencia sexual que afecta a niñez y adolescencia.

b. Embarazo y unión en niñas y adolescentes

Los embarazos y las uniones tempranas afectan el proyecto de vida de niñas y adolescentes mujeres y



constituyen la vulneración de otros derechos, sobre todo, cuando estos son producto de la violación y otros delitos sexuales. Según el IML, entre 2013 y 2016, 364 niñas y adolescentes quedaron embarazadas a causa de una violación o estupro, en promedio hubo 91 embarazos por año (IML, 2017).

En 2016 se registró una disminución de embarazos en niñas y adolescentes respecto al 2015. Se reportaron 21,477 embarazos entre 10 y 19 años (30% del total de embarazos) (MINSAL, 2017). De estos 11,198 fueron de menores de 18 años; lo que muestra una reducción de aproximadamente 1,900 niñas y adolescentes. No obstante, la cifra representa un desafío para el SNPNA, no solo por la protección a los derechos a la integridad personal y desarrollo de la niña o adolescente que se vuelve madre, sino también para la niña o niño próximo a nacer, dado el riesgo que la condición de embarazo representa en esta etapa de la vida.

Las uniones en niñas y adolescentes pueden desencadenar situaciones de violencia doméstica, física y sexual, daños a la salud física y mental, e incluso, aislamiento social por la desigualdad de género y la diferencia de edad en relación con sus parejas (UNFPA, MINSAL, CONNA y otros, 2016). Según datos de la EHPM 2016, 49,762 adolescentes mujeres entre los 15 y 19 años (14.1%) estuvieron en algún tipo de unión²⁵ (DIGESTYC, 2017).

El estudio de Maternidad y unión en niñas y adolescentes, identificó que el promedio de años de educación alcanzado de las niñas y adolescentes embarazadas es de apenas 3.93 años, colocándolas en una condición de mayor vulnerabilidad y exclusión respecto a la población que estudia (UNFPA, MINSAL, CONNA y otros, 2016). En 2016, se identificaron 1,042 niñas y adolescentes embarazadas en 565 centros escolares públicos. En el 26.55% de estos centros, las niñas y adolescentes no continuaron sus estudios (MINED, 2016a, p.78).

En este contexto, el Gabinete de Gestión Social e

Inclusión²⁶, determinó como prioridad nacional para el presente año, la formulación de **una estrategia nacional para la prevención del embarazo y uniones en niñas y adolescentes**. Proceso que está siendo coordinado por el CONNA, MINSAL, MINED, ISDEMU, INJUVE y otras instituciones del SNPNA, con la asistencia técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

2.3 Homicidios de niñas, niños y adolescentes

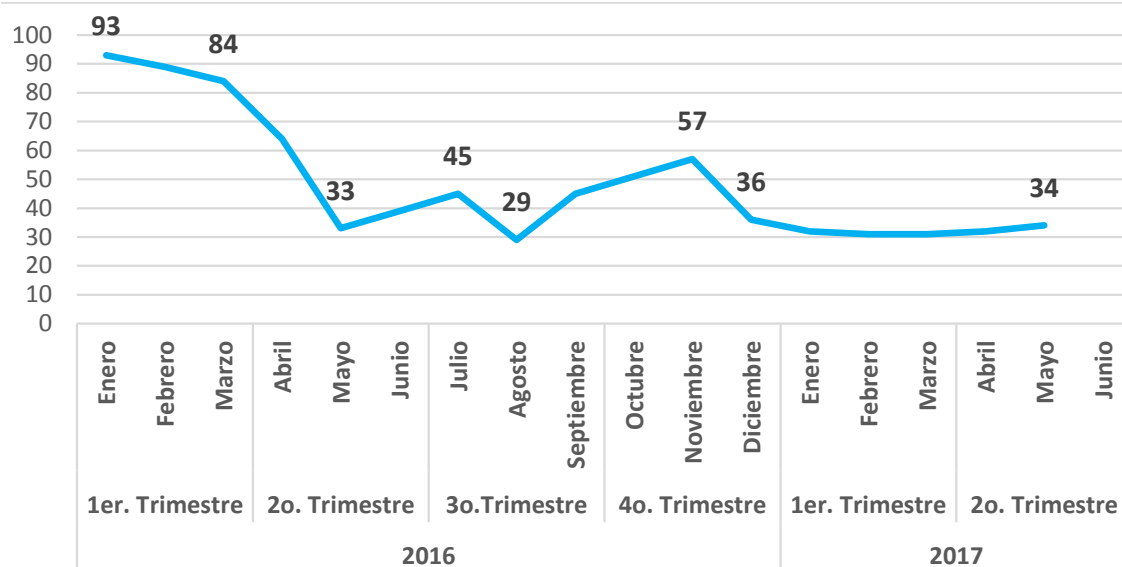
Uno de los principales fenómenos sociales que afecta en forma directa e indirecta el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes es la violencia delictual; los homicidios y lesiones son violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Por otra parte, la inestabilidad social y económica impacta de forma indirecta en sus condiciones de vida y seguridad, lo que limita su normal desarrollo bio-psico-social y, en consecuencia, su bienestar.

Si bien, al cierre de 2016, se registró una reducción de homicidios en niñas, niños y adolescentes respecto al año anterior, los índices siguieron siendo muy elevados; el IML registró 665 homicidios de niñas, niños y adolescentes en ese año. Sin embargo, se muestra una significativa reducción en 2017, que puede interpretarse como uno de los principales resultados de la implementación del PESS, sobre todo, de las acciones de prevención y erradicación de la violencia; al pasar de 84 homicidios en marzo 2016 a 31 en marzo de 2017. En los primeros cinco meses de 2017 la tendencia decreciente se profundizó, reportando la ocurrencia de 203 homicidios menos que en el mismo periodo de 2016.

25: Acompañadas, casadas, viudas y separadas.

26 D.E. N° 9 del 11 de junio de 2014, el cual contiene la "Creación del Gabinete de Gestión Social e Inclusión". D.O. N° 109, Tomo N° 403 del 13 de junio de 2014.

Gráfica 11. Homicidios de NNA por trimestres y meses. (enero 2016- mayo 2017)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de IML para todos los meses.

En los primeros cinco meses de 2017, la proporción de homicidios de niñas, niños y adolescentes en relación al total fue de 11.4%, evidenciando también una disminución con relación a 2016 (13.3%). Este comportamiento obedece a una mayor reducción en los homicidios de

niñas, niños y adolescentes (55.9%), en comparación a la experimentada en los homicidios de adultos (48.5%).

Tabla 1. Proporción de los homicidios de NNA para los primeros cinco meses de cada año con relación al total de homicidios. (2015-2017)

Meses	2015			2016			2017		
	Total Homicidios	Homicidios de NNA	%	Total Homicidios	Homicidios de NNA	%	Total Homicidios	Homicidios de NNA	%
Enero	336	36	10.7%	740	93	12.6%	258	32	12.4%
Febrero	307	26	8.5%	664	89	13.4%	240	31	12.9%
Marzo	484	48	9.9%	611	84	13.7%	317	31	9.8%
Abril	418	55	13.2%	353	64	18.1%	289	32	11.1%
Mayo	643	66	10.3%	356	33	9.3%	298	34	11.4%
Total	2,188	231	10.6%	2,724	363	13.3%	1,402	160	11.4%

Fuente: Sistema de Información de la Niñez y Adolescencia (SINAES), con base en datos de IML



En el primer trimestre de 2017²⁷, al igual que en años anteriores, las principales víctimas de homicidios fueron los adolescentes hombres (86.2%) y las armas de fuego, el principal instrumento con el que se cometió este delito, aproximadamente en 7 de cada 10 homicidios. Le siguen los objetos corto contundentes con un 8.5% de los casos y la asfixia por estrangulación con 5.3%.

El 61.7% de los homicidios de niñas, niños y adolescentes ocurrieron en tres departamentos del país. San Salvador encabeza la lista con 38.3%, seguido de Sonsonate con 12.8% y La Libertad con 10.6%. Los departamentos de Cabañas y La Unión presentaron la menor cantidad de homicidios con el 1.1% en cada uno.

Para el mismo periodo, los datos reflejan que los espacios públicos constituyen los lugares con mayor ocurrencia de homicidios de niñas, niños y adolescentes. El 38.3% sucedieron en la vía pública, en la calle y en carretera y el 25.6% ocurrieron en "terreno", "finca" y "hacienda", lugares predominantes en la zona rural.

Existe la percepción social de una alta participación de adolescentes en actividades delictivas, especialmente vinculadas a la acción de maras y pandillas, por lo que se infiere que los homicidios hacia este grupo de edad están relacionados con la pertenencia a dichos grupos delincuenciales. Sin embargo, las estadísticas demuestran que la mayor proporción de hechos delictivos son cometidos por adultos -por cada adolescente detenido/sentenciado, hay 9 adultos detenidos/sentenciados (CONNA, 2016, p.5).

La violencia delincriminal vinculada a maras y pandillas genera, además, amenazas y vulneraciones a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, deserción escolar, la cooptación para el cometimiento de delitos y, en ocasiones, la movilidad interna y la

27. La información desagregada de homicidios de NNA reportada por IML, corresponde a datos a marzo de 2017.

migración irregular. Frente a ello, el SNPNA ha generado orientaciones para el abordaje de las diferentes manifestaciones de violencia que afecta a la niñez y adolescencia, con énfasis en la violencia que generan las maras y pandillas, a fin de establecer relaciones de coordinación entre las instituciones y entidades, a través de mecanismos para la implementación de programas y planes que garanticen los derechos de la niñez y la adolescencia en el territorio.

En el marco del eje de prevención de violencia del PESS se desarrollaron acciones orientadas a proveer oportunidades educativas, productivas y de rehabilitación de espacios públicos, tales como: el Plan de vacaciones recreativas; las modalidades de educación flexible; mejora en la infraestructura de centros educativos; procesos de capacitación y formación en habilidades para la vida y el trabajo, pasantías, emprendimiento y formación técnica, a través del Programa "Jóvenes con todo"; la implementación del Programa "Actívate"; la mejora de espacios públicos e infraestructura de parques, canchas y casas comunales; así como la conformación de escuelas de iniciación deportiva (MJSP, 2017).

2.4 Migración irregular de niñas, niños y adolescentes.

La migración en El Salvador es un fenómeno motivado por la búsqueda de mejores oportunidades de vida, la reunificación familiar, los desastres de origen socio-ambiental y recientemente por la violencia social y delincuencia. Originalmente, la migración era un fenómeno que involucraba principalmente a las personas adultas, en la actualidad involucra cada vez más a las niñas, niños y adolescentes, quienes migran acompañados por sus familias, separadas de estas o sin ninguna compañía. Asimismo, la migración de adultos ha generado un impacto en la vida de las niñas, niños

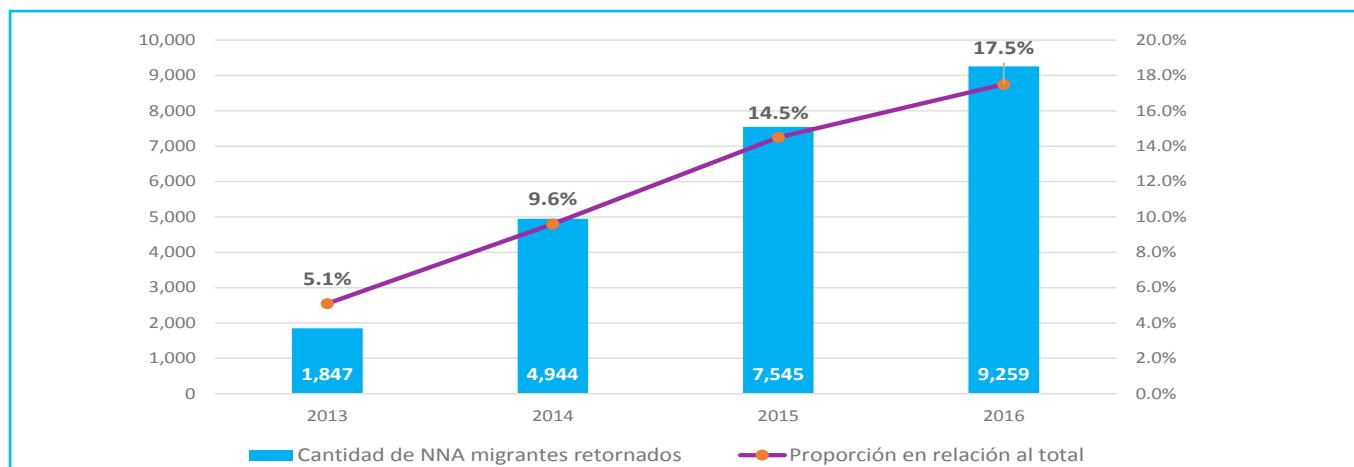
y adolescentes que se quedan en el país de origen sin uno o ambos padres.

Este comportamiento ha elevado la preocupación del Estado ante la identificación de las condiciones de país que inciden en la decisión de migrar; la condición de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia frente a diversas formas de violencia y privaciones que enfrentan en los países de tránsito y de destino; así como, por los efectos que la desintegración familiar tiene en su derecho a vivir en familia, a recibir su cuidado y protección.

En la mayor parte de los casos, la migración se realiza de manera irregular, limitando la cuantificación del flujo de migrantes; no obstante, los retornos provenientes de México y Estados Unidos, permiten aproximar un flujo migratorio que ronda entre los 500 y 600 salvadoreños por día (Chacón, Gómez y Alas, 2013, p.512).

Entre 2013 y 2016 la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó 192,506 personas retornadas por migración irregular, en su mayoría procedentes de México y Estados Unidos. De esta población, 23,595 (12.3% en promedio) fueron niños, niñas y adolescentes.

La cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes retornados se incrementó año con año hasta 2016, mostrando una significativa disminución en 2017. En 2013 fueron 1,847, es decir, 5.11% del total de la población retornada. Para 2016, la cifra alcanzó 9,259 y su porcentaje en relación con la población total fue de 17.49%; esto significa que en cuatro años se incrementó en 400% y su participación fue 12 puntos porcentuales mayor en el total de los migrantes retornados.

Gráfica 12. Comportamiento de los retornos de niñas, niños y adolescentes (2013-2016)

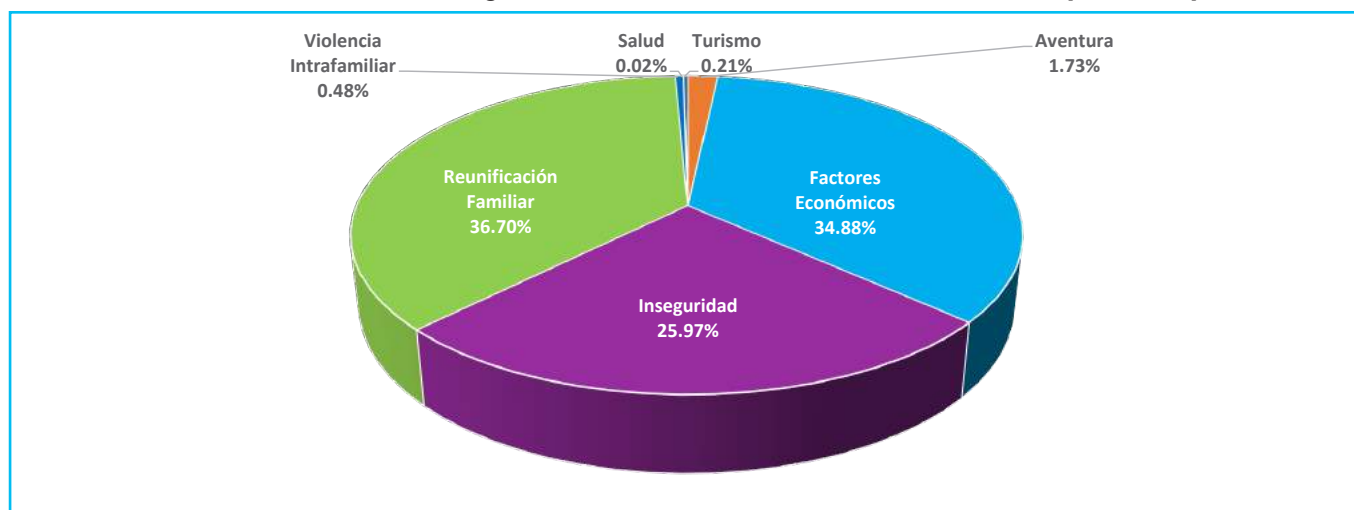
Fuente: Elaboración propia con base de datos de DGME, 2013-2016

La población de niñas, niños y adolescentes que viajaron solos se incrementó de 1,251 en 2013 a 3,698 en 2016 (crecimiento de 195%), lo que aumenta su condición de vulnerabilidad frente a los factores de riesgo existentes a lo largo de la ruta migratoria. Sin embargo, el 51.5% de las niñas, niños y adolescentes retornados migraron acompañados por un miembro de su familia y esta población ha mostrado en el periodo un mayor crecimiento de la que viaja sola.

Al analizar la edad de las niñas, niños y adolescentes migrantes, predominan los adolescentes entre los 15 y 17 años (43.7%), seguidos por el grupo etario que oscila entre los 10 y 14 años (25.03%).

El 77.6% de los retornos fue por la vía terrestre, en su mayoría provenientes de México; el 22.36% por vía aérea, principalmente, de los Estados Unidos de América. Con relación al lugar de origen según departamento del país, se reporta que el 18.3% provenían de San Salvador (18.3%), San Miguel (11.90%), Usulután (11.64%) y la Unión (8.74%).

La DGME realiza una entrevista a las niñas, niños y adolescentes mayores de 9 años que retornan por la vía terrestre, en esta se identifican los motivos de la migración. Entre 2014 y 2016, se realizaron 12,152 entrevistas identificando mayor recurrencia en las siguientes causas o motivos: reunificación familiar 36.7%, factores económicos 34.8% y la inseguridad 25.9%.

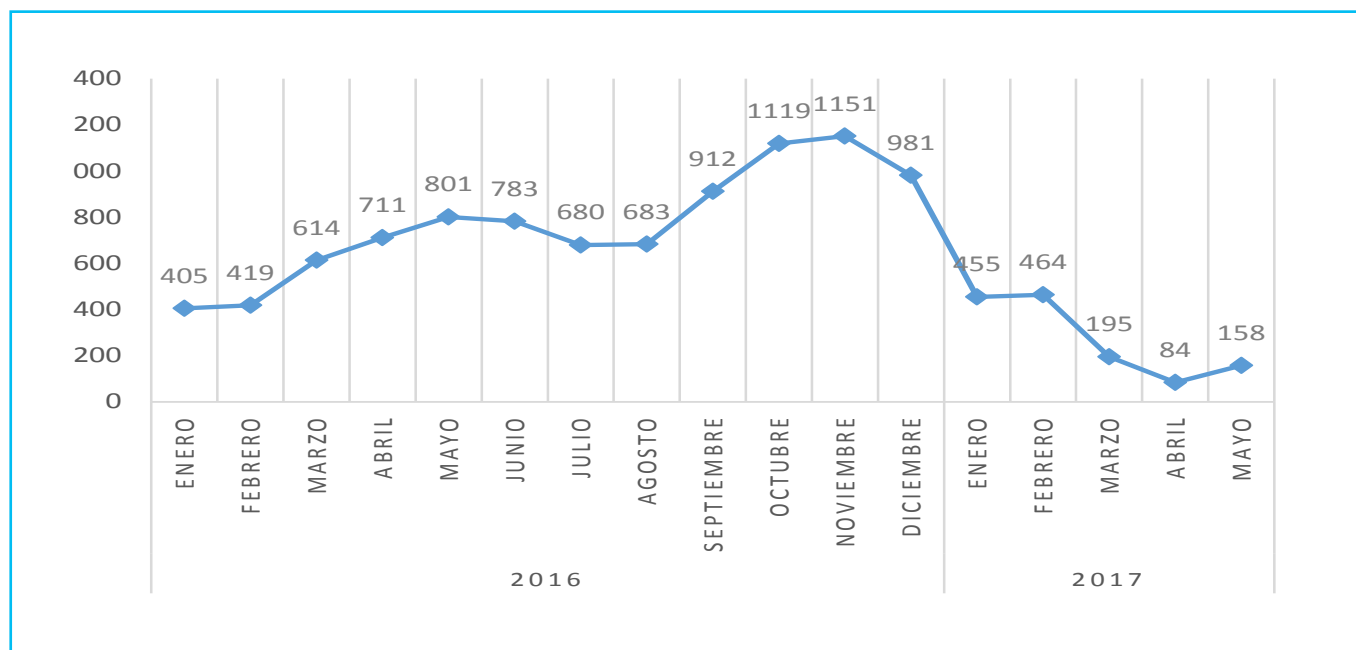
Gráfica 13. Motivos de migración identificados en las entrevistas de DGME (2014-2016)

Fuente: Elaborado con base en datos de DGME, 2014-2016

El comportamiento de los retornos en los primeros cinco meses de 2017 muestra una tendencia a la baja, situación contraria a la de años anteriores. De enero a mayo, 1,356 niñas, niños y adolescentes fueron retornados,

revelando una reducción de 1,594 retornados menos en relación con 2016. Las reducciones más evidentes fueron en los meses de marzo y abril.

Gráfica 14. Retornos de niñas, niños y adolescentes (enero 2016-mayo 2017).



Fuente: Elaboración con base en datos de DGME, 2016-2017

Este comportamiento, no necesariamente está asociado a una disminución del fenómeno migratorio; puede estar relacionado a cambios en los procedimientos administrativos y judiciales generados por la actual transición del gobierno estadounidense.

La proporción de niñas, niños y adolescentes retornados con relación al total de la población migrante, también presentó una disminución en estos cinco meses con relación al mismo periodo del año anterior, pasando de 14.9% en 2016 a 10.4% en 2017.

En el periodo analizado el Estado Salvadoreño realizó una serie de acciones encaminadas a la ejecución de programas y proyectos de servicios especializados para migrantes retornados. En el caso del ISNA, elaboró y presentó a finales de 2016, el Plan de atención integral a niñas, niños y adolescentes retornados en su entorno familiar desde una perspectiva de derechos

humanos, género e inclusión, el cual contiene el marco conceptual, las líneas estratégicas y las metas establecidas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes retornados, mediante el desarrollo de un conjunto de acciones sistemáticas y organizadas en su entorno familiar y comunitario. (ISNA, 2016)

De igual manera, el ISNA instaló 3 Centros de Atención a la Niñez, Adolescencia y sus Familias (CANAF) en San Miguel, Usulután y Santa Ana, enmarcado en el programa de Protección a la Niñez y Adolescencia retornada, con el objetivo de desarrollar programas de atención psicológica, atención integral a la salud, fortalecimiento familiar, educación, cultura y deporte con la población de niñas, niños y adolescentes retornados.

Asimismo, en abril de 2017, la Mesa de coordinación para la protección y atención de niñez y adolescencia



migrante implementó el Protocolo de Protección y Atención de Niñez y Adolescencia Migrante Salvadoreña, cuyo objetivo es establecer e implementar procedimientos interinstitucionales de actuación para la recepción, protección y atención de niñas, niños y adolescentes migrantes salvadoreños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con el propósito de que se incorporen a sus comunidades desde un enfoque de derechos humanos.



3. Conclusiones

- a. El cumplimiento y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, sigue siendo un horizonte hacia el que el Estado, la familia y la sociedad deben avanzar con mayor solidez. La inclusión de la niñez y adolescencia en el PQD 2014-2019 como población prioritaria es un primer paso en esa vía; sin embargo, uno de los principales retos para cumplir con los compromisos internacionales y la agenda nacional en la materia es la disponibilidad de recursos financieros adecuados para mantener e incrementar los niveles de inversión social y la sostenibilidad de los programas sociales que abonan a la construcción de las condiciones requeridas por las familias para gozar sus derechos básicos universales.

Los esfuerzos en la implementación de los programas sociales en el marco del Sistema de Protección Social Universal, tales como Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas mediante bonos de salud, educación y el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios han contribuido en la reducción de la pobreza y la desigualdad. No obstante, es necesario ampliar la cobertura de los programas y avanzar en el desarrollo de competencias de las familias para mejorar sus condiciones de vida y transformar su entorno social.

La nueva estrategia para la erradicación de la pobreza representa una oportunidad para la territorialización de los servicios en la atención integral de las familias a través del acompañamiento familiar, la educación e inclusión financiera, la inclusión y el desarrollo productivo, la infraestructura social, el apoyo al ingreso y la reducción de las brechas de desigualdad (SETEPLAN, 2017).

- b.** Con relación al derecho a la salud de las niñas y niños de primera infancia y sus condiciones de nutrición, es necesario implementar programas para la adopción de patrones de alimentación nutritiva y balanceada en las familias, con énfasis en las mujeres embarazadas, a fin de disminuir las condiciones de bajo peso al nacer en las niñas y niños; factor estrechamente relacionado al embarazo en adolescentes y a la inadecuada nutrición durante el periodo de gestación.

Asimismo, es importante que el Sistema Nacional de Salud continúe los esfuerzos para reducir las tasas de mortalidad infantil; así como, para sostener las tasas de inscripción y atención en servicios de salud, garantizando los derechos a la supervivencia de las niñas y los niños en sus primeros años de vida. También es preciso reducir los factores de riesgo, tanto para la madre, como para el recién nacido, mediante la inscripción prenatal y postnatal.

La implementación de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, es indispensable para asegurar el derecho de las niñas y los niños a la lactancia materna. Las instituciones del sector público deben dar la pauta en cuanto al cumplimiento de obligaciones laborales, tales como: la habilitación de espacios higiénicos al interior de los centros de trabajo para que las madres puedan extraerse y conservar la leche materna (lactarios) y el otorgamiento del tiempo para la lactancia ya estipulado por la Ley. Por su parte, los Ministerios de Salud y Trabajo pueden contribuir al cumplimiento de la ley a través de la supervisión.

- c.** Por otra parte, es necesaria la ampliación de la cobertura en el nivel de educación inicial, lo que implica fortalecer la inversión para contar con instalaciones adecuadas para la atención de niñas y niños; la formación y especialización de docentes o educadores; así como, la conformación de equipos de profesionales que atiendan de manera integral a este grupo etario (terapistas de lenguaje, fisioterapeutas, nutricionistas, pediatras, personal materno infantil, entre otros).

En el ámbito familiar persiste la concepción de que las niñas y los niños antes de los siete años, no requieren de un proceso educativo formal, limitando su incorporación a las diferentes vías de atención que se ofrecen para su desarrollo; por lo que es necesario trabajar en la sensibilización de madres, padres o responsables del cuidado, para que reconozcan las ventajas y beneficios de la incorporación temprana de las niñas y los niños en procesos educativos.

- d.** En materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia delictual, es necesaria la continuidad en la implementación del Plan El Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado; ya que ambos incluyen

abordajes integrales orientados a la reducción de la violencia mediante la prevención, la represión del delito y la protección y atención a víctimas; no obstante, uno de los principales desafíos en materia de protección es la ejecución de programas especializados para proteger a niños y niñas que son amenazados y utilizados por maras y pandillas. Para tal fin, es imprescindible disponer del financiamiento necesario.

- e.** Con relación a la población adolescente y la violencia sexual, es prioritario el fortalecimiento de los servicios de salud y la implementación de estrategias de educación sexual y reproductiva. Las dimensiones e impactos del embarazo temprano, por las múltiples consecuencias en el proyecto de vida de niñas y adolescentes, presentan desafíos inmediatos, en términos de prevención, atención, protección y restitución de sus derechos.

Por lo anterior, se reafirma la importancia de hacer efectiva la Estrategia 1.4 establecida en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (PNPNA) 2013-2023, relativa a fortalecer y ampliar la cobertura de servicios de educación y atención integral en salud sexual y reproductiva con enfoque de género, de derechos y con base científica como parte de los servicios de salud, particularmente, mediante estrategias y acciones articuladas entre el MINED y el MINSAL.

Especial atención merece la alta incidencia de violencia sexual ejercida en las niñas y las adolescentes mujeres por personas conocidas en su entorno familiar y comunitario. La violación, las agresiones sexuales y el estupro, constituyen vulneraciones graves a sus derechos humanos, sobre todo, cuando estas tienen como resultado un embarazo. Por lo que es necesario mejorar la respuesta judicial en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, el Estado Salvadoreño debe armonizar su legislación con la normativa internacional y cumplir con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el Consejo de Derechos Humanos, mediante la prohibición del matrimonio y las uniones en adolescentes.

- f.** Por otra parte, es preciso insistir en que la migración irregular pone en grave riesgo la vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Tanto el traslado como la detención y posterior devolución o retorno, se producen en condiciones contrarias a las normas internacionales que protegen sus derechos.

Las medidas estatales de prevención de la migración irregular deben considerar el análisis previo sobre sus causas; asimismo, es necesario generar condiciones sociales y económicas para desincentivar este tipo de migración.

En cuanto a la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que retornan al país, es importante la sostenibilidad de programas como los CANAF y los que se orientan a generar oportunidades laborales y económicas para sus familias.

- g.** Finalmente, es oportuno reiterar que los costos sociales de no invertir en la niñez y la adolescencia implicarán un mayor esfuerzo para superar las brechas del desarrollo, por lo que es imprescindible proveer de recursos a las políticas públicas que priorizan el cumplimiento y garantía de los derechos de esta población.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas establecidas por el país, se convierten en una oportunidad para avanzar en la superación de los desafíos antes descritos.



4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Legislativa.

D.L. N° 839 del 26 de marzo de 2009, el cual contiene la “Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”, publicado en el Diario Oficial N° 68, Tomo N° 383, del jueves 16 de abril de 2009.

D.L. N° 478 del 14 de septiembre de 2016, el cual contiene “Disposiciones transitorias a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia relacionadas con el plazo para la Autorización y el Registro de las Entidades de Atención de la Niñez y la Adolescencia”, publicado en el Diario Oficial N° 173, Tomo N° 412, del martes 20 de septiembre de 2016.

D.L. N° 479 del 20 de septiembre de 2016, el cual contiene “Reforma al Decreto Legislativo No. 839 de fecha 26 de marzo del año 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, Tomo N° 383, del jueves 16 de abril de 2009, el cual contiene la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”, publicado en el Diario Oficial N° 173, Tomo N° 412, del martes 20 de septiembre de 2016.

Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR).

(2017). Situación de la Economía Salvadoreña al 1º Trimestre de 2017. San Salvador El Salvador. Recuperado el 11 de junio de 2017 de: <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1891640030.pdf>

(2017a). Continúa la fase expansiva del crecimiento económico: En 2016 aumenta 2.4% y se prevé 2.3% en 2017. San Salvador, El Salvador. Página web del Banco Central de Reserva, Comunicado de prensa No. 13/2017. Recuperado el 11 de junio de 2017 de: http://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=952:contin%C3%BAa-la-fase-expansiva-del-crecimiento-econ%C3%B3mico-en-2016-aumenta-24-y-se-prev%C3%A9-23-en-2017&Itemid=168

(2017b). Informe Macroeconómico diciembre 2016. San Salvador. El Salvador. Recuperado el 10 de junio de 2017, de: <http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/871925518.pdf>

Chacón, F. Gómez, L. y Alas, T. (2013). Configuración de imaginarios sociales sobre la migración irregular en jóvenes potenciales migrantes y retornados. San Salvador, El Salvador: Revista de Estudios Centroamericanos, volumen 68, número 735.

Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD). (2016). Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2015. Primera Lectura de datos.

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA). (2016). Orientaciones para el funcionamiento coordinado del Sistema de Protección Integral ante amenazas y vulneraciones de derechos a niñez y adolescencia por la violencia (con énfasis en la generado por maras y pandillas. San Salvador, El Salvador. Documento aprobado en la 8va. sesión ordinaria del Comité Técnico Coordinador del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, del jueves 27 de octubre de 2016.

Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

(2017). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016. San Salvador El Salvador.

(2016). Índice de Precios al Consumidor (IPC). Promedio anual y por mes de la Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural (2015-2016). Reporte elaborado en la página web de DIGESTYC. Recuperado el 25 de mayo de 2017, de: <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html>

(2016a). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015. San Salvador, El Salvador.

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y de la Adolescencia (ISNA). (2016). Plan de atención integral a niñas, niños y adolescentes retornados en su entorno familia desde una perspectiva de Derechos Humanos, Género e Inclusión. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: [http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum_SV_Plan_ISNA-OIM\(IMPRESION\)-Version_Final_diciembre2016-20161220-IA-19952.pdf](http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum_SV_Plan_ISNA-OIM(IMPRESION)-Version_Final_diciembre2016-20161220-IA-19952.pdf)

Instituto de Medicina Legal (IML)

Informe estadístico sobre embarazos producto de violación y estupro (01-01-16 hasta 31-12-16) San Salvador. El Salvador.

Ministerio de Educación (MINED).

(2016). Informe de Rendición de Cuentas junio 2015-mayo 2016: San Salvador, El Salvador. Ministerio de Educación. Recuperado el 10 de junio de 2017: <https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/715-informes-de-rendicion-de-cuentas/6258-informe-de-rendicion-de-cuentas-junio-2015-mayo-2016>

(2016a). Observatorio MINED 2016, sobre los Centros Educativos Públicos de El Salvador. San Salvador, El Salvador: Elaborado con los resultados del proyecto "Monitoreo a los Programas del MINED desarrollados en los Centros Educativos Públicos de El Salvador, año 2016.

(2015). Observatorio MINED 2015, sobre los Centros Educativos Públicos de El Salvador. San Salvador, El Salvador: Elaborado con los resultados del proyecto "Monitoreo a los Programas del MINED en Centros Educativos de El Salvador y Asistencia Técnica al Programa de Alimentación y Salud Escolar, PASE 2015.

Ministerio de Salud (MINSAL)

(2017). Discurso de la señora ministra de Salud. Dra. Violeta Menjivar, con motivo de la presentación del tercer informe de labores ante la Asamblea Legislativa, 2016-2017. Página Web MINSAL, <http://www.salud.gob.sv/13-07-2017-discurso-de-la-senora-ministra-de-salud-dra-violeta-menjivar-con-motivo-de-la-presentacion-del-tercer-informe-de-labores-ante-la-asamblea-legislativa-2016-2017/>

(2016). Informe de labores 2015-2016. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud.

(2015). Informe de labores 2014-2015. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud.

Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Nacional de la Salud (INS), Dirección General de Estadística y Censos DIGESTYC y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2015). Encuesta Nacional de Salud, 2014. Resultados principales. San Salvador, El Salvador: Recuperado de: <http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2780/download/39531>

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). (2017). Logros del Gabinete de Seguridad. Junio 2016 a mayo 2017. San Salvador, El Salvador.

Naciones Unidas (ONU). (2005). Comité de los Derechos del Niño. Observación General N° 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia. CRC/G/GC/7.

Policía Nacional Civil (PNC). (2012). Perfil de la Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana (UNIMUJER-ODAC). San Salvador, El Salvador: con el apoyo técnico y financiero de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Recuperado el 21 de julio de 2017: <http://www.pnc.gob.sv/portal/page/portal/informativo/novedades/Unidad%20de%20Genero/Perfil%20Unidad%20Institucional%20de%20Atencion%20Especializada%20UNIMUJER-ODAC.pdf>

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONNA), SDEMU e Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). (2016). Maternidad y unión en niñas y adolescentes. Consecuencias en la vulneración de sus derechos. Informe Final. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: http://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Maternidad_Uniones_ninas%20yadolescentes_vo.2016.pdf

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN). (2015). Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. El Salvador Productivo, Educado y Seguro. San Salvador El Salvador: Gobierno de El Salvador.





WWW.CONNA.GOB.SV



Tel. 2511-5400



[/CONNA.EL.SALVADOR](https://www.facebook.com/CONNA.EL.SALVADOR)



[@CONNA_ES](https://twitter.com/CONNA_ES)